



GACETA DEL CONGRESO

SENADO Y CÁMARA

(Artículo 36, Ley 5ª de 1992)

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
www.imprenta.gov.co

ISSN 0123 - 9066

AÑO XXXIII - N° 679

Bogotá, D. C., martes, 28 de mayo de 2024

EDICIÓN DE 29 PÁGINAS

DIRECTORES:

GREGORIO ELJACH PACHECO
SECRETARIO GENERAL DEL SENADO
www.secretariassenado.gov.co

JAIME LUIS LACOUTURE PEÑALOZA
SECRETARIO GENERAL DE LA CÁMARA
www.camara.gov.co

RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

CÁMARA DE REPRESENTANTES

PONENCIAS

INFORME DE PONENCIA POSITIVA PARA SEGUNDO DEBATE EN CÁMARA DE REPRESENTANTES DEL PROYECTO DE LEY NÚMERO 323 DE 2023 CÁMARA, 171 DE 2022 SENADO

*por medio del cual se declara al río Ranchería, su
cuenca y afluentes como sujeto de derechos y se
dictan otras disposiciones.*

Bogotá, D. C., 24 de mayo de 2024

Honorable Representante

LUIS RAMIRO RICARDO BUELVAS

Presidente Comisión Quinta Constitucional
Permanente

Cámara de Representantes

Referencia: Informe de Ponencia Positiva para Segundo Debate en Cámara de Representantes del Proyecto de Ley número 323 de 2023 Cámara, 171 de 2022 Senado, por medio del cual se declara al río Ranchería, su cuenca y afluentes como sujeto de derechos y se dictan otras disposiciones.

Conforme la honrosa designación que la Mesa Directiva de la Comisión Quinta Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes mediante oficio CQCP 3.5 / 327 / 2022-2024 y de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política y en la Ley 5ª de 1992, rindo Informe de Ponencia Positiva para Segundo Debate ante la Plenaria de la Cámara de Representantes del Proyecto de Ley número 323 de 2023 Cámara, 171 de 2022 Senado, *por medio del cual se declara al río Ranchería, su cuenca y afluentes como sujeto de derechos y se dictan otras disposiciones.*

Cordialmente,

ANA ROGELIA MONSALVE ÁLVAREZ

Representante a la Cámara por la Circunscripción Especial Afrodescendiente
Partido Demócrata Colombiano

INFORME DE PONENCIA POSITIVA PARA SEGUNDO DEBATE DE CÁMARA PROYECTO DE LEY NÚMERO 323 DE 2023 CÁMARA, 171 DE 2022 SENADO

*por medio del cual se declara al río Ranchería, su
cuenca y afluentes como sujeto de derechos y se
dictan otras disposiciones.*

1. OBJETO DEL PROYECTO DE LEY

Esta iniciativa legislativa busca establecer un marco legal para la protección, conservación y gestión sostenible del río Ranchería, su cuenca y afluentes mediante la declaración de estos como sujetos de derechos para su conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado.

Este propósito deberá cumplirse con la efectiva participación de las entidades del Estado y las comunidades que habitan en el área de influencia del río Ranchería, del departamento de La Guajira.

2. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS

El Proyecto de Ley número 323 de 2023 Cámara, 171 de 2022 es de origen parlamentario, de autoría de los Honorables Senadoras(es) Martha Isabel Peralta Epieyú, Roy Leonardo Barreras, Inti Raúl Asprilla Reyes, María José Pizarro, Pablo

Catatumbo, Gloria Inés Flórez, Edwing Fabián Díaz Plata, Pedro Hernando Flórez, Robert Daza, Jhonathan Ferney Pulido, Polivio Rosales, Clara López y de los honorables Representantes Erick Velasco Burbano, Alirio Uribe Muñoz, Heráclito Landínez, Carmen Felisa Ramírez, fue radicado el día 6 de septiembre de 2022 y publicado en *Gaceta del Congreso* número 1083 de 2022.

El día 14 de septiembre de 2022 se designó como Ponente de Primer Debate al honorable Senador Inti Raúl Asprilla, y el Informe de Ponencia junto al articulado fue aprobado el día 23 de mayo de 2023 por la Comisión Quinta del Senado de la República, sesión en la cual se presentaron once (11) proposiciones.

Fueron avaladas las proposiciones de la honorable Senadora Esmeralda Hernández con el propósito de modificar los artículos 3° y 4° para incluir al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt (IAVH) en la comisión de guardianes y establecer la obligación de presentación de informes por parte de Corporguajira.

Nueve proposiciones adicionales se dejaron como constancias así: honorable Senadora Yenny Roza artículo 1° para incluir “toda la población” participe en el plan de restauración, artículo 2° incluir el deber de “respetar los derechos otorgados por el Estado de las actividades que desarrollan en la zona de influencia del río Ranchería, su cuenca y afluentes”, artículo 2° estableciendo un término para la elección del representante legal de la población. Honorable Senadora Isabel Zuleta proponía modificar el artículo 1° incluyendo como finalidad la restauración de los “servicios ecosistémicos, artículo 2° proposición eliminatoria; artículo 3° proposición modificatoria para incluir diferentes actores en la Comisión de Guardianes del río Ranchería; artículo 4° eliminar el término de protección del plan y modificar la conformación de la comisión adicionando indicadores de medición; artículo 5° eliminaba la presidencia por parte de los representantes legales de la comisión de guardianes e incluía como finalidad la “priorización de servicios ecosistémicos”; artículo 6° eliminar el término de protección del plan.

El 22 de noviembre de 2023, el proyecto de ley se aprobó en la Plenaria del Senado de la República, sesión en la que se avaló la propuesta de artículo nuevo de los senadores de la bancada del Partido Mira a través de la cual se ordena al Ministerio de Ambiente y a Corporguajira implementar las acciones necesarias para restablecer las condiciones ambientales del río Ranchería, eliminando los bloqueos que impiden que el caudal natural siga su curso y se permita el acceso del agua a todas las comunidades, así mismo se propuso informar a la plenaria del Senado de la República, dentro de los seis meses siguientes a la vigencia de esta ley, el estado actual del río ranchería.

El día 8 de mayo de 2024 se surtió el primer debate en la Comisión Quinta Constitucional de la Cámara de Representantes, siendo aprobado por unanimidad.

Durante el debate se presentaron once proposiciones, de las cuales se aprobaron siete y las demás quedaron como constancias a petición de los autores de la iniciativa. Respecto del primer y séptimo artículo se modificó la redacción, al artículo segundo se aprobó la inclusión de nuevos invitados a la Comisión de Guardianes; el artículo tercero se aprobó una aclaración sobre el proceso de consulta previa de acuerdo con una redacción propuesta por el Ministerio del Interior, los artículos cuarto y quinto se unificaron en un solo artículo proponiéndose además la participación de los entes de control a nivel territorial.

3. CONCEPTOS INSTITUCIONALES

Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa.

Con oficio radicado 2022-2-002410-023392 de Fecha: 2022-11-11 la Subdirectora Técnica de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, conceptuó que esta iniciativa legislativa no estaba sujeta al desarrollo de la consulta previa:

“En consecuencia, desarrollado el análisis jurisprudencial y fáctico del proyecto de ley del asunto, esta Autoridad Administrativa concluye que el mismo no es una medida legislativa sujeta al desarrollo de consulta previa, bajo las siguientes consideraciones:

1. *El proyecto de ley establece medidas de protección del río Ranchería, su cuenca y afluentes, ecosistema en el cual las comunidades étnicas de dicho territorio desarrollan sus prácticas tradicionales. En consecuencia, la creación de medidas de protección del medio en que las comunidades étnicas desarrollan sus usos y costumbre no podrá considerarse una afectación directa en contra de los derechos de dichos colectivos.*

2. *No es una medida que reglamente los usos de los recursos naturales de los colectivos étnicos.*

3. *No es un proyecto que se refiera a los sistemas de autogobierno de los colectivos étnicos.*

4. *No es una medida que regule o reglamente elementos establecidos en el Convenio 169 de la OIT ni a los estamentos de participación con los que cuentan las comunidades étnicas. Por el contrario, la norma en estudio aborda el enfoque diferencial y la participación de los colectivos étnicos dentro del marco de creación de estamentos de decisión para la protección del Río Ranchería, su cuenca y afluentes.*

En consecuencia, el PL 171-22C, por medio del cual se declara al río Ranchería, su cuenca y afluentes como sujeto de derechos y se dictan otras disposiciones, no es una medida legislativa sujeta al desarrollo de consulta previa”.

Sin embargo, seis meses después, con oficio radicado 2023-3-002410-016119 Id: 138981 de fecha: 2023-05-29 el Subdirector Técnico de Consulta Previa (e) indicó la necesidad de realizar consulta previa,

*“En suma, tratándose de la declaratoria del río Ranchería, su cuenca y afluentes como entidad sujeto de derechos para su protección, conservación, mantenimiento y restauración, se concluye que la expedición del proyecto de ley, **por medio del cual se declara al río ranchería, su cuenca y afluentes como sujeto de derechos y se dictan otras disposiciones**, es una medida que comprometa directa y específicamente los atributos de las comunidades étnicas, tales como su autonomía, autodeterminación y elementos materiales que los distinguen como sus creaciones, instituciones y comportamientos colectivos, por lo tanto es una medida sujeta al desarrollo del proceso de consulta previa”.*

Teniendo en consideración la contradicción de conceptos emitidos durante el trámite legislativo de esta iniciativa, solicité al Ministerio del Interior conceptualizar de manera definitiva respecto del presente proyecto de ley, sin que a la fecha haya obtenido respuesta de esta cartera ministerial.

Sin embargo, en fecha de 17 de abril de 2024, la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa en respuesta a petición elevada por la honorable Senadora autora Martha Peralta, emitió un nuevo concepto señalando que no es una medida legislativa sujeta al desarrollo de consulta previa e invita a analizar los artículos 2° y 3° a la luz del en virtud del Decreto número 2353 de 2019:

*“Por tal razón, al cotejar los documentos entregados a esta Dirección para el respectivo análisis de procedencia de la consulta previa, se pudo evidenciar que, el proyecto que hoy allega su despacho, corresponde a la misma iniciativa ya analizada en dos oportunidades, con cambios en algunos de los artículos. Debido a esto, **consideramos emitir un nuevo concepto en el que se analizará técnica y jurídicamente el “artículo modificado y aprobado en la Plenaria del Senado, para el Proyecto de Ley número 171 de 2022 Senado, por medio de la cual se declara al río Ranchería, su cuenca y afluentes como sujeto de derechos y se dictan otras disposiciones.***

En consecuencia, desarrollado el análisis jurisprudencial y fáctico para el “artículo modificado y aprobado en la Plenaria del Senado, para el Proyecto de Ley número 171 de 2022 Senado, por medio de la cual se declara al río Ranchería, su cuenca y afluentes como sujeto de derechos y se dictan otras disposiciones, esta Autoridad Administrativa concluye sobre el asunto lo siguiente:

1. *Que el proyecto de ley, a pesar de abordar elementos que conciernen a las comunidades étnica, como lo son las fuentes hídricas, no se evidencia en el articulado, una reglamentación que condicione el*

uso del río Ranchería, como recurso natural de los colectivos étnicos.

2. *Es una medida que invita a las comunidades étnicas a participar de forma activa y democrática, en la elaboración del Plan de Acción del río Ranchería, con el fin de protegerlo, tutelar sus derechos, recuperar, rehabilitar y restaurar sus ecosistemas y evitar daños adicionales al ambiente en la región.*

3. *No es una medida que regule o reglamente elementos establecidos en el Convenio 169 de la OIT ni a los estatutos de participación con los que cuentan las comunidades étnicas. Por el contrario, se trata de un marco legal específico, con el objetivo de declarar al río Ranchería, su cuenca y sus afluentes, como una entidad sujeta de derechos para su conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y con la efectiva participación de las comunidades que habitan en el área de influencia del río Ranchería, del departamento de La Guajira.*

4. *No es una medida que comprometa directa y específicamente los atributos de la condición étnicas de las comunidades, tales como su autonomía, autodeterminación y elementos materiales que los distinguen como sus creaciones, instituciones y comportamientos colectivos.*

*En suma, el articulado modificado y aprobado en la Plenaria del Senado, para el Proyecto de Ley número 171 de 2022 Senado, por medio de la cual se declara al río Ranchería, su cuenca y afluentes como sujeto de derechos y se dictan otras disposiciones, **no es una medida legislativa sujeta al desarrollo de consulta previa.***

*Por otra parte, respecto al Plan de Acción que se menciona en los artículos 2° y 3° del Proyecto de Ley número 171 de 2022 Senado, por medio de la cual se declara al río Ranchería, su cuenca y afluentes como sujeto de derechos y se dictan otras disposiciones, **esta Autoridad considera necesario analizarlo de forma particular y específica, en virtud del Decreto número 2353 de 2019; en aras de realizar un estudio particular y expreso sobre la posible afectación directa que pueda causar un proyecto, obra o actividad a las comunidades étnicas”.***

Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico del Ministerio de Vivienda

En concepto emitido por el Viceministro de Agua y Saneamiento Básico se avaló la presente iniciativa legislativa en tanto la finalidad del presente proyecto de ley aporta a las funciones y competencias de esta cartera ministerial en materia de prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico, toda vez que permiten la consolidación de acciones para la protección, conservación, mantenimiento y restauración del río Ranchería y la puesta en marcha del embalse multipropósito, del cual se desprenden los diferentes usos del recurso hídrico, con prioridad de uso para consumo humano, en un territorio muy vulnerable a los efectos de la crisis climática.

4. ANTECEDENTES CONSTITUCIONALES Y LEGALES

4.1. Sobre la declaratoria de ríos, páramos y ecosistemas como sujetos de derecho.

Los pronunciamientos judiciales y precedente constitucional que se relacionará a continuación evidencian la necesidad de abordar desde un aspecto estructural la urgencia de protección y conservación de la principal fuente de agua para consumo humano del departamento de La Guajira. Históricamente las comunidades que dependen del río Ranchería para su sustento han tenido que acudir a sede judicial para que se les garantice sus derechos fundamentales de acceder a agua potable, a la vida en condiciones dignas a la salud, a la alimentación y seguridad alimentaria. En consecuencia los jueces y altas cortes han ordenado adoptar medidas transitorias y definitivas para garantizar un mínimo de acceso, disponibilidad y calidad de agua potable.

La adopción de estas medidas ha incluido la declaratoria de un estado de cosas inconstitucional, la declaración de varios ríos y ecosistemas como entidades sujetas de derecho, el reconocimiento de la interdependencia entre la diversidad biológica y cultural, la conformación de comisiones de guardianes y diseños de planes de conservación e implementación de estrategias para la reducción y contaminación de impactos ambientales.

Sentencia SU 196 de 2023¹

En julio de 2001 *la Empresa de Energía del Pacífico (EPSA, hoy CELSIA S.A E.S.P.) abrió las compuertas de fondo de la represa “El Chidral” de la Central Hidroeléctrica del Bajo Anchicayá (CHBA), produciendo que una gran cantidad de sedimentos acumulados fueran vertidos en este río, esto impactó negativamente el río Anchicayá y los ecosistemas conexos, viéndose afectados también las comunidades ribereñas y “sus territorios, cuerpos, familias, mentes y espíritus”.*

A pesar de las diferentes medidas adoptadas por las diferentes entidades con competencias ambientales para el restablecimiento de los derechos del ecosistema y de las comunidades afectadas, estas no han sido suficientes, razón por la cual los accionantes solicitaron se aplicara la parte resolutoria de la Sentencia T-622 de 2016 a través del cual la Corte Constitucional como medida de protección resolvió declarar, como entidad sujeta de derechos al río Atrato, entre otras.

La Sala Plena de la Corte Constitucional en Sentencia de Unificación del 1 de junio de 2023 resolvió conceder la protección de los derechos fundamentales de los consejos comunitarios accionantes i) al agua ante la ausencia de información de los monitoreos hidrobiológicos fisicoquímicos que permitan determinar el estado actual del ecosistema

acuático del río Anchicayá; ii) al ambiente sano por el incumplimiento sistemático de varios programas del Plan de Manejo Ambiental (PMA) pues ello genera una incertidumbre para determinar el adecuado funcionamiento del proyecto y definir su vida útil; iii) al trabajo y la alimentación derivado del no avance de programas, cumplimiento de compromisos de fortalecimiento piscícola trayendo consigo la afectación a la práctica tradicional de la pesca y al trabajo de las comunidades ribereñas, además de no existir alternativas de generación de empleos y capacitaciones; iv) a recibir un tratamiento diferenciado como etnia afrodescendiente por la afectación negativa de sus derechos bioculturales, y la posibilidad de habitar sus territorios con conservación de sus usos y costumbres v) a la consulta previa por el incumplimiento sistemático de los acuerdos de consulta previa derivados del PMA.

Con relación a la declaración de entidades naturales como “sujeto de derechos” consideró el Alto Tribunal constitucional en su precedente constitucional que esta responde a la necesidad del Estado colombiano de adoptar políticas públicas integrales sobre conservación, preservación y compensación, que tomen en cuenta la interdependencia entre la diversidad biológica y cultural; es una concepción más integral y comprensiva de la diversidad étnica y cultural que configuran la diversidad *biocultural*, ello en cuanto se fundamenta en la interconexión existente entre los seres humanos, las comunidades, la diversidad cultural, con la naturaleza.

Bajo esta concepción serían las comunidades étnicas las primeras llamadas a ser guardianes y responsables de sus ecosistemas mediante el ejercicio de sus costumbres, usos y tradiciones; una forma de honrar y preservar esta riqueza étnica y natural que nos rodea; siendo responsabilidad la preservación, conservación, restauración de las entidades estatales en todos sus niveles con competencias ambientales.

La declaración de entidades naturales como sujetos de derechos ha sido una medida extendida en el país, que deviene de una conciencia creciente en la conservación de ecosistemas valiosos para la vida futura, refleja preocupación en materia ambiental por la crisis climática, es así como la Corte Constitucional reseñó los diferentes pronunciamientos judiciales a través de los cuales se ha declarado los ecosistemas naturales como sujetos de derechos.

A continuación, se presentan algunos pronunciamientos judiciales a través de los cuales se han realizado estas declaraciones, con la anotación que en todas sus sentencias se han dictado con efecto *inter comunis*, quiere decir que sus efectos se hacen extensivos para proteger derechos de todos los afectados por la misma situación de hecho o de derechos en condiciones de igualdad.

Sentencia T-622 de 2016

La Corte Constitucional en Sentencia T-622 de 2016² analizó en sede de tutela si las actividades de minería y deforestación ilegal a gran escala en el río Atrato, con maquinaria pesada y el uso de mercurio vulneraba los derechos de la población de las riberas.

¹ Sala Plena de la Corte Constitucional. Sentencia de Unificación SU-196 de 2023. M.S. Antonio José Lizarazo Ocampo. Junio 1° de 2023. Referencia: Expediente T-8.197.319

² Corte Constitucional. Sentencia T-622-16. MP- Jorge Iván Palacio Palacio.

En su análisis consideró que la contaminación, en especial con mercurio y cianuro derivado de estas actividades ilegales perjudica la producción de alimentos, afecta las condiciones sanitarias, vulnera las prácticas y tradiciones culturales y abiertamente violan el derecho fundamental al agua, al medio ambiente y a la biodiversidad.

El Alto Tribunal Constitucional resolvió declarar la existencia de *“una grave vulneración de los derechos fundamentales a la vida, a la salud, al agua, a la seguridad alimentaria, al medio ambiente sano, a la cultura y al territorio de las comunidades étnicas que habitan la cuenca del río Atrato y sus afluentes, imputable a las entidades del Estado colombiano accionadas (...) **por su conducta omisiva** al no proveer una respuesta institucional idónea, articulada, coordinada y efectiva para enfrentar los múltiples problemas históricos, socioculturales, ambientales y humanitarios que aquejan a la región y que en los últimos años se han visto agravados por la realización de actividades intensivas de minería ilegal”*.

En consecuencia, reconoció al río Atrato, su cuenca y afluentes **como una entidad sujeto de derechos** a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y las comunidades étnicas, debiéndose conformar una **comisión de guardianes del río Atrato**, ordenó también la puesta en marcha de un **plan para descontaminar la cuenca del río Atrato y sus afluentes, los territorios ribereños, recuperar sus ecosistemas y evitar daños adicionales al ambiente en la región**, entre otras acciones.

Finalmente, le recordó al Estado colombiano que las autoridades nacionales, departamentales y municipales tienen **“obligaciones constitucionales irrenunciables con el único objeto de garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales del pueblo colombiano. Que de acuerdo al Preámbulo, consisten en “asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo”**. Objetivos que van a ser desarrollados y reiterados en los artículos **1º (Estado social de derecho), 2º (Fines del Estado), 5º (Supremacía de los derechos de la persona), 7º (Protección de la diversidad étnica y cultural), 8º (Protección de la riqueza cultural y natural de la Nación) 11 (Inviolabilidad del derecho a la vida), 12 (Integridad personal), 13 (Derecho a la igualdad), 16 (Derecho al libre desarrollo de la personalidad), 22 (Derecho a la paz), 44 (Derecho de los niños), 48 (Derecho a la seguridad social), 49 (Derecho a la salud y al saneamiento básico), 63 (Protección del patrimonio público), 64 (Garantía de acceso progresivo a la propiedad de la tierra), 65 (Derecho a la seguridad alimentaria), 67 (Derecho a la educación), 70 (Derecho a la cultura), 72 (Protección del patrimonio cultural), 79 (Derecho al medio ambiente sano), 80 (Protección de los recursos naturales), 188 y 189 (Funciones y obligaciones del**

Presidente de la República), 288 (Ordenamiento territorial), 298 (Régimen departamental), 311 (Régimen municipal), 339 (Planes Nacionales de Desarrollo), 356 y 357 (Sistema general de participación), 365 (Servicios públicos eficientes) y 366 (Garantía de bienestar general)”.

Caso del río Cauca: Sentencia de Tutela Radicado número 050013103004-2019-0007-102 proferida por el Tribunal Superior de Medellín³

La Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Superior de Medellín en sentencia del 17 de junio de 2019 concluyó *“(i) que las generaciones futuras son sujetos de derechos de especialísima protección, (ii) que tienen derechos fundamentales a la dignidad, al agua, a la seguridad alimentaria y al medio ambiente sano, y (iii) que el río Cauca es sujeto de derecho, que implica, al igual que se hizo con el río Atrato, su protección, conservación, mantenimiento y restauración, a cargo del Ente Público Municipal y del Estado”*.

Para asegurar la efectiva protección, recuperación y conservación del río, el Tribunal ordenó la conformación de una comisión de guardianes con entidades del orden nacional, local, academia, sociedad civil y demás que deseen vincularse y ordenó a los entes de control realizar el proceso de acompañamiento y seguimiento de las órdenes dictadas.

La presente decisión fue adoptada al considerar que lo sucedido el 6 de febrero de 2019 cuando la Dirección del Proyecto hidroeléctrico Hidroituango, tras una crisis de orden infraestructural, tomó la decisión de cerrar la compuerta de la casa de máquinas. Su cierre implicó una disminución dramática del caudal del río y con ello afectó todo el ecosistema de fauna y flora que dependen del buen estado del río. La disminución del caudal también generó una afectación con la economía de los municipios rivereños cuyas actividades dependen de la pesca, el transporte y el turismo.

Si bien es cierto el juez de primera instancia negó el amparo constitucional al considerar que no había existido omisión de los deberes por parte de los agentes involucrados, consideró el *ad quem* revocó su decisión, pues consideró que un proyecto de esta magnitud está relacionado indiscutiblemente con el desarrollo sostenible y de las futuras generaciones, y las afectaciones que se generen trasciende los derechos de las comunidades rivereñas quienes necesitan medidas de protección. Razón por la cual concedió el amparo constitucional.

Caso del Río Pance: Sentencia de Tutela Radicado número 2019-00043-00 proferida por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad⁴

³ Tribunal Superior de Medellín. Sentencia de Tutela Rad. número 050013103004-2019-0007-102. 17 de junio de 2019. Sala Cuarta Civil de Decisión.

⁴ Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali, Valle del Cauca. Sentencia de Tutela Radicado número 2019-00043-00 del 12 de julio de

El Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en sede de tutela ordenó el 12 de julio de 2019 i) **Reconocer al río Pance**, su cuenca y afluentes **como una entidad sujeto de derechos** a la protección, conservación, mantenimiento y restauración; ii) **reconocer a las generaciones futuras como sujetos de derechos** de especial protección y garantizar el amparo de sus derechos fundamentales al agua limpia, a la vida en condiciones de dignidad, a la salud y al medio ambiente sano, iii) conformar una comisión de guardianes del río Pance, entre otras acciones.

Se concedió el amparo constitucional, al verificarse en el proceso de marras que las entidades estatales del orden local y empresas privadas vinculadas a procesos de urbanización han incumplido sus obligaciones por omitir la contaminación del río Pance derivado de aguas residuales domésticas (excretas humanas, jabones, detergentes, restos de fertilizantes y fungicidas, etc.), que en forma permanente generan los conjuntos residenciales campestres aledaños; y también porque se permitió el desarrollo urbanístico al autorizar la construcción de obras, viabilidad de servicios públicos, vertimientos de aguas residuales domésticas al río Pance en zona con vocación ambiental y ecosistémica, atravesada por el río Pance, sin contar con red de alcantarillado público que permita la recolección y vertimiento de las aguas lluvias y de las residuales domésticas al sistema central de alcantarillado de la ciudad.

Caso Amazonas: Sentencia de Tutela número STC 4360-2018 proferida por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia⁵

El caso resolvió la acción de tutela interpuesta por un grupo de 25 niños, niñas, adolescentes y jóvenes adultos contra la Presidencia de la República, los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Agricultura y Desarrollo Rural, entre otras entidades, solicitando la protección de sus derechos a gozar de un ambiente sano, vida y salud.

La procedencia y salvaguardas de estos derechos fueron considerados por la Corte Suprema bajo el presupuesto de que la conservación de la Amazonía es una obligación de orden nacional y global, pues se trata del eje ambiental principal existente en el planeta catalogado como “el pulmón del mundo”, con una extensión entre 5, y 8 millones de km², representa el 6% de la superficie del planeta, el 40% del territorio de América Latina y el Caribe, sus ríos aportan el 20% del agua dulce del planeta. El río Amazonas tiene 6,9 mil km de extensión, siendo el mayor del mundo.

Para su protección la comunidad internacional ha generado diferentes compromisos en el Tratado de Cooperación Amazónica (TCA), en el convenio Marco sobre el Cambio Climático de París en 2015

Colombia adquirió el compromiso de reducir la deforestación.

Los accionantes anotaron que como principales causas de deforestación i) acaparamiento ilegal de tierras (60-65%); ii) cultivos de uso ilícito (20-22%); iii) la extracción ilegal de yacimientos minerales (7-8%); iv) las obras de infraestructura; v) los cultivos agroindustriales y vi) la extracción punible de maderas.

De acuerdo con lo probado en el expediente, la Corte advirtió la omisión de las entidades por parte de las autoridades demandadas, al no monitorear los recursos naturales y sancionar a quien vulneren sus normas de protección, en consecuencia en aras de proteger este ecosistema global ***se reconoce a la Amazonía Colombiana como entidad, “sujeto de derechos”, titular de protección, de la conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y las entidades territoriales que la integran***⁶.

La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sede de tutela el 5 de abril de 2018 ordenó la construcción de un **“pacto intergeneracional por la vida del Amazonas colombiano (PIVAC)”** con el propósito de adoptar medidas a reducir a cero la deforestación y la emisión de gases efecto invernadores mediante el cual se adopten estrategias del orden nacional, regional y local, entre otras acciones.

Caso Páramo de Pisba: Sentencia de Tutela Radicado número 2018-0001602 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá⁷

Los accionantes de la presente acción de tutela alegaron que durante la delimitación realizada sobre el Páramo de Pisba el Ministerio de Ambiente no realizó un proceso participativo con los trabajadores de la empresa AMÉRICA LTDA., titular y operadora del Contrato de Concesión Minera número FD5-082, sin tener en consideración la evaluación del conflicto de tipo social y económico que representaría dar por terminado el título minero del que es titular la empresa.

Para el Tribunal Administrativo de Boyacá la delimitación del Páramo de Pisba es de gran relevancia y al momento de establecer el alcance de su protección debe procurarse la proporcionalidad entre el mayor beneficio de esta respecto a la menor restricción de los derechos de las comunidades parameras, para lo cual es necesario el diseño de planes de compensación o reubicación laboral, el cual debe ser fruto de la concertación democrática a través de los representantes de los distintos grupos de interés.

Sin embargo, según el acervo probatorio se corroboró que los espacios para la socialización y participación democrática no fueron eficaces ni efectivos, su convocatoria no fue amplia y no

2019. Juez Hugo Fernelly Franco Obando.

⁵ Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia de Tutela número STC 4360-2018 del 5 de abril de 2018. MP. Luis Armando Tolosa Villabona.

⁶ Ver página 45.

⁷ Tribunal Administrativo de Boyacá. Sentencia de Tutela Radicado número 2018-00016-01 del 9 de agosto de 2018. Sala de Decisión número 3.

tuvo en cuenta a todos los sectores con interés en la delimitación, no se tomó en cuenta que la caracterización socioeconómica de los municipios de Socha y Socotá son diferentes a los municipios del departamento de Casanare.

Para el Tribunal la labor de la autoridad pública no puede limitarse a comunicar una decisión ya tomada, sino que debe construir una posición que resulte menos gravosa para los derechos en conflicto aparente, por ello confirmó la decisión de primera instancia, pero modificó la parte resolutoria para adoptar decisiones de tipo estructurales para armonizar los derechos en conflicto.

En consecuencia, el Tribunal Administrativo de Boyacá en sede de tutela el 9 de agosto de 2018 i) confirmó la sentencia del Juzgado Administrativo Oral del Circuito de Duitama, ii) declaró aplicable el proceso de delimitación del del Páramo de Pisba el precedente constitucional sentado por la Sentencia T-361 de 2017; iii) Declaró el Páramo de Pisba como sujeto de derechos, siendo aplicable el convenio de Diversidad Biológica y iv) estableció parámetros mínimos de respeto en materia de compensación, reubicación laboral entre otras acciones.

4.2. Sobre la protección al río Ranchería en sede judicial.

A continuación, se relacionan algunos de los fallos judiciales más representativos que han tenido por resultado la protección del río Ranchería. Se precisa que, al no existir aún su declaratoria como sujeto de derecho, su protección se ha concretado en i) como un recurso natural en el marco de la biodiversidad y el medio ambiente; y ii) en conexidad con los derechos fundamentales individuales y colectivos de la población en general, así como de las comunidades étnicas y pueblos indígenas que habitan ancestralmente en sus zonas de cauce, cuenca e influencia geográfica.

Sentencia SU- 698 del 2017⁸

En este caso, la Corte Constitucional debía pronunciarse respecto de si la modificación artificial del arroyo Bruno con ocasión de un proyecto de explotación carbonífera que incluía la extracción del material minero en el fondo de la cuenca del afluente, vulneraba los derechos fundamentales de diferentes comunidades wayú de la Media Guajira, pues consideran los accionantes que el proyecto tiene la potencialidad de producir daños ambientales graves e irreversibles que no fueron identificados ni tenidos en cuenta, ni por la compañía minera ni por las autoridades ambientales, daños que, a su turno, ponen en peligro la integridad y la salud de las comunidades que se asientan en los territorios aledaños al arroyo.

El departamento de La Guajira es la zona desértica más grande del país y sus principales fuentes hídricas con el río Ranchería y al río Cesar. El río

Ranchería es la mayor reserva de agua superficial de la región, con esta se alimenta y se recarga los acuíferos y arroyos naturales de su cauce y uno de estos afluentes es el arroyo Bruno, ubicado entre los municipios de Albania y Maicao.

Según el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del río Ranchería de Corpogujira, el arroyo Bruno es un área estratégica de gran valor ecológico, encargada de abastecer el agua para consumo humano y para el riego de cultivos en la región.

De acuerdo con la Corte Constitucional la desviación del arroyo Bruno se produce en un territorio altamente intervenido y que puede repercutir de forma negativa porque no es clara la naturaleza, ni la magnitud, ni los impactos ambientales de la intervención, con la posibilidad de que se puedan provocar daños ambientales no previsibles.

Para el alto Tribunal Constitucional existen incertidumbres asociadas al contexto como las (i) *las características y el estado del ecosistema en el que se inscribe la desviación del arroyo Bruno, es decir, del bosque seco tropical, y de la cuenca del río Ranchería; (ii) el impacto del fenómeno del cambio climático y del calentamiento global en el departamento de La Guajira, en el bosque seco y en la cuenca del río Ranchería; (iii) las intervenciones que históricamente ha efectuado Cerrejón en el territorio en el que se propone la desviación del arroyo Bruno, así como las que tiene proyectado realizar, teniendo en cuenta los efectos acumulativos y residuales que todas estas producen*".

También se prevén "*incertidumbres asociadas a los impactos ecosistémicos que se generarían con la desviación parcial del cauce del arroyo Bruno, en particular, (iv) la garantía de las funciones culturales, de abastecimiento, regulación y mantenimiento que cumple el arroyo; (v) el impacto aguas arriba que podría tener la desviación de arroyo; (vi) el impacto a la oferta hídrica que generaría la remoción de los acuíferos en los que reposa el cauce actual y la realineación de las aguas superficiales en otro canal de condiciones geomorfológicas distintas, y que carece actualmente de un bosque de galería, y, finalmente, (vii) el valor biológico de la cuenca del arroyo Bruno en el contexto del Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica del río Ranchería como del Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Albania*".

Para el Alto Tribunal estas incertidumbres amenazan los derechos fundamentales al agua, a la seguridad alimentaria y a la salud de las comunidades accionantes y de las comunidades dependientes del arroyo Bruno, razón por la cual mantuvo la suspensión de las obras y ordenó generar un escenario participativo en el cual puedan discutirse todas las incertidumbres detectadas, debiéndose realizar un estudio en el que se determinara la viabilidad ambiental de proyecto; también ordenó la adopción de medidas de prevención, mitigación,

⁸ Sala Plena de la Corte Constitucional. Sentencia de Unificación SU-698-17. M.S. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Noviembre 28 de 2017. Expediente T-5.443.609

control, compensación y corrección de los impactos sociales y ambientales del proyecto.

Sentencia T-614 de 2019⁹

La Sala Novena de la Corte Constitucional en sede de tutela estudió la petición formulada por integrantes del Resguardo Indígena wayú Provincial quienes solicitaron la protección de sus derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal, a la salud, al medio ambiente sano y a la intimidad de los habitantes de su comunidad ante afectaciones presuntamente derivadas por las operaciones de extracción, transporte y almacenamiento de carbón y material estéril por parte de la empresa Carbones del Cerrejón Limited.

La Defensoría del Pueblo informó que el resguardo carece de servicio de agua potable y depende del río Ranchería a través de carrotanques que envía la Alcaldía de Barrancas y la empresa Cerrejón, y *las otras fuentes de agua son pozos que están fuera de servicio por daños en los equipos y jagüeyes que se secan en épocas de altas temperaturas.*

En desarrollo del proceso de amparo judicial, Corpoguajira reportó dentro de sus hallazgos que en la planta de emulsión se presentan derrames constante de hidrocarburos que ha dejado su rastro de muchos años en el suelo y vegetación por un tramo aproximado de 300 metros hasta llegar a la Laguna Sur y después al río Ranchería, debiendo la empresa eliminar el dique como sistema de retención porque en época de alta precipitación este no funciona y todos los residuos líquidos aceitosos se pasan a la laguna y terminan en el río.

Así mismo, informó que se logró identificar arrastre de sedimentos directos al cauce del río Ranchería mediante escorrentías que socavan el suelo y que desestabilizan el margen del río y el bosque ripario.

La Corte Constitucional logró comprobar que la presencia de cortinas de polvo que se desplazaban desde los botaderos de la empresa, incumplimientos de la norma de vertimientos y la presencia de residuos líquidos aceitosos de la empresa, así como material tipo carbón en el río Ranchería.

La Corte también advirtió *que diversas pruebas señalan una afectación a los cuerpos de agua circundantes al resguardo indígena accionante, así como a la vegetación de la región. (...) La misma empresa Cerrejón reconoció en uno de sus escritos que, si bien no realiza vertimientos al río Ranchería, puede llegar material a éste “a través de las escorrentías desde las vías de acarreo, lo cual ocurre en los periodos de fuertes lluvias”.*

Comprobándose además que como resultado de las operaciones de extracción, transporte y almacenamiento de carbón y material estéril se encontró i) Presencia de polvillo de carbón o material

particulado en el aire; ii) Sustancias químicas en el aire, como azufre, cromo, cobre y zinc; iii) Sustancias químicas asociadas a los incendios de los mantos de carbón; iv) Aumento progresivo de material particulado PM10 en la zona; v) Concentraciones de PM10 que superan los niveles exigidos por la OMS; vi) emisión constante de polvillo que cae sobre la comunidad; vii) contaminación de cuerpos de agua y vegetación por malos manejos de aguas de escorrentía; viii) presencia de sedimentos contaminantes en las fuentes de agua superficiales y subterráneas de la comunidad, así como la desaparición y alteración de cauces y acuíferos, ix) incumplimiento en las normas de vertimientos; x) presencia de residuos líquidos aceitosos en el río Ranchería y vertimientos sin permiso; xi) afectación a la flora por la polución y material particulado; xii) exceso de ruido por las explosiones y actividad de maquinaria; xiii) altas concentraciones de metales en sangre y daño en células de pobladores; xiiii) afecciones pulmonares, respiratorias.

Considerando lo anterior el Alto Tribunal constitucional ordenó adoptar medidas transitorias urgentes para reducir el riesgo que sus operaciones representan para la comunidad indígena Provincial, así como la creación de una comisión técnica para determinar los factores de riesgos y las alternativas de mitigación, prevención y corrección a corto, mediano y largo plazo, entre otras disposiciones.

Sentencia T-216 de 2019¹⁰

La Sala Segunda de Revisión de la Corte constitucional evaluó en este caso la vulneración de los derechos al acceso al agua de niños, niñas y adolescentes, y de las mujeres gestantes y lactantes del pueblo wayú en cumplimiento de las órdenes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Consideró la Corte que las afectaciones alegadas se enmarcan en el estado de cosas inconstitucional identificado en la Sentencia T-302 de 2017 y reiteró que la situación en materia de acceso al agua, alimentación y salud debe ser atendido por todas las autoridades según lo dispuesto en dicha providencia.

Sentencia T-009-18¹¹

En el caso particular se sometió a consideración de la Corte Constitucional una disputa sobre posesión de elección de autoridades propias de la Comunidad de Lomamoto, pero además se solicitó la extensión al Resguardo de Lomamoto los programas y proyectos implementados en las comunidades de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao, en virtud de las medidas cautelares adoptadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al considerar que padecen las mismas necesidades

⁹ Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional. Sentencia de Tutela T-614 de 2019. M.P. Alberto Rojas Ríos. Diciembre 16 de 2019. Referencia: Expediente T-6.518.300

¹⁰ Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional. Sentencia de Tutela T-216 de 2019. M.P. Diana Fajardo Rivera. Mayo 21 de 2019. Referencia: Expediente T-7.098.674.

¹¹ Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional. Sentencia de Tutela T-009 de 2018. M.P. Alberto Rojas Ríos. Enero 29 de 2018. Expediente T-6.085.424

nutricionales así como el acceso al agua potable y prevención de enfermedades.

El resguardo se encuentra ubicado a 5 kilómetros de la vía principal asfaltada que comunica el norte con el sur de La Guajira, sin embargo, no cuenta con acceso a agua potable; el pozo del que extraen agua es salada y genera problemas de salud, comprobándose estado de desnutrición de 40 niños y niñas.

La situación que afronta el resguardo Lomamoto es similar al de las comunidades wayú asentadas en los municipios de Uribia, Manaure Riohacha y Maicao, y teniendo en consideración el carácter vinculante de las medidas cautelares de la CIDH conforme al artículo 93 superior, la Corte Constitucional resolvió hacer extensivas al resguardo accionante las políticas públicas en condiciones de igualdad que se imparten para atender la emergencia de desnutrición infantil en las comunidades wayú de los municipios mencionados.

Sentencia T-302 de 2017¹²

La Sala Séptima de Revisión de la Corte constitucional resolvió en este caso declarar la existencia de un ***“estado de cosas inconstitucional en relación con el goce efectivo de los derechos fundamentales a la alimentación, a la salud, al agua potable y a la participación de los niños y niñas del pueblo wayú”*** derivado de la constatación de *“(…) una vulneración generalizada, injustificada desproporcionada de los derechos fundamentales al agua, a la alimentación, a la seguridad alimentaria y a la salud de los niños y niñas del pueblo wayú”*.

De acuerdo con los antecedentes fácticos y las verificaciones realizadas en el marco del proceso de amparo constitucional, la Corte evaluó la interdependencia y transversalidad de los derechos al acceso al agua, a la salud, a la alimentación y a la participación étnica. El desconocimiento profundo de uno solo de los derechos provocó un efecto dominó que conllevó a una violación múltiple de derechos fundamentales.

En sus consideraciones, la Corte reprocha que la muerte por desnutrición de niños y niñas wayú sea el resultado de equivocaciones y omisiones de autoridades estatales y privados con competencias en la garantía de estos derechos. Estas muertes son derivadas de una ausencia de una alimentación adecuada (no entrega de alimentos), la falta de acceso al agua (no provisión por carrotanques, ausencia de mantenimiento a cuerpos de agua), las omisiones y desconocimiento de acceso al derecho a la salud, la imposición de programas sin enfoque étnico y sin la comprensión de las costumbres, tradiciones e instituciones del pueblo wayú, todo lo cual se dificulta ante la ausencia de infraestructura y baja penetración del Estado colombiano en la Alta Guajira.

¹² Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional. Sentencia de Tutela T-302 de 2017. M.P. Aquiles Arrieta Gómez. Mayo 8 de 2017. Referencia: Expediente T-5.697.370

Concentrándonos en la carencia del agua potable, esta es una afectación generalizada que tiene como causas i) periodos extensos de sequía que secan los pozos naturales y ii) omisión de las autoridades para la provisión sostenible del suministro de agua potable. Para la Defensoría del Pueblo el aumento de la temperatura ha afectado de forma desproporcionada al pueblo wayú, especialmente en la Alta Guajira, quienes se concentran en zonas desérticas, quienes no cuentan con fuentes de agua potable y tienen dificultades importantes para acceder a ella: *“Sin agua potable disponible, accesible y de calidad, ningún esfuerzo de alimentación o de atención en salud podrá solucionar la crisis de muertes de niños y niñas en La Guajira”*.

Por las anteriores razones la Corte Constitucional resolvió i) tutelar los derechos fundamentales a la salud, al agua potable, a la alimentación y a la seguridad alimentaria de los niños y niñas del Pueblo wayú en los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia; ii) Declarar el Estado de Cosas Inconstitucional¹³; iii) Ordenar la adopción de medidas para el seguimiento y evaluación de políticas públicas para garantizar los derechos vulnerados; iv) adoptar como objetivos constitucionales mínimos entre otras adoptar acciones para el aumento de la disponibilidad, accesibilidad y calidad del agua, garantizando un diálogo genuino con las comunidades.

Debe señalarse que en el marco de la acción de tutela la Corte Constitucional reseñó las propuestas de las comunidades para la superación de las vulneraciones a sus derechos fundamentales, a consultar por todas las entidades vinculadas, destacándose las de la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas wayú de la Zona de la Marina y del Consenso de las Autoridades Indígenas wayú, quienes propusieron acciones específicas relacionadas con la protección y conservación del río Ranchería así: *“i) Se garantice a la población wayú el acceso permanente al agua potable ya sea a través del proyecto de la represa del río ranchería o cualquier otra forma; ii) Devolver el río ranchería a su cauce natural; iii) Dictar medidas cautelares para proteger el río Ranchería y sus afluentes como arroyo bruno; iv) Dictar medidas cautelares para proteger al río Ranchería y su afluente como arroyo Bruno”*.

Sentencia T-256 de 2015¹⁴

La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional analizó si se vulneraron los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, a la salud, a la intimidad, a la consulta previa y

¹³ Según los factores que pueden determinar el estado de cosas inconstitucional se encuentra “la no expedición de medidas legislativas, administrativas o presupuestales necesarias para garantizar el derecho conculcado”.

¹⁴ Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional. Sentencia de Tutela T-256 de 2015. M.P. Martha Victoria SÁCHICA Méndez. Mayo 5 de 2015. Referencia: Expediente T-4.587.990.

subsistencia a los miembros de la comunidad de negros afrodescendientes de Chancleta del municipio de Barrancas, La Guajira asentados en los corregimientos de Patilla y Chancleta, al no reconocerles su identidad como pueblo afro y su consecuente negación a realizar consulta previa en un proceso de reasentamiento y continuar expuestos a la contaminación que genera una mina de carbón a cielo abierto.

La Corte resolvió *amparar los derechos al ambiente sano, a la vida, la salud, al agua potable y a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado sobre las medidas de reasentamiento de las familias a las que pertenecen los accionantes y al reconocimiento y subsistencia como pueblo ancestral de la Comunidad de Negros Afrodescendientes de los corregimientos de Patilla y Chancleta del municipio de Barrancas.*

En este caso la Corte Constitucional pudo evidenciar i) la falta de abastecimiento de agua en la comunidad de manera continua y suficiente; ii) el agua no es apta para consumo humano, es insalubre ya que contiene porcentajes de sales; iii) existen barreras físicas para acceder a la agua en condiciones de igualdad a las viviendas que fueron reubicadas; iv) la contaminación del río Ranchería por *coliformes fecales producto de descargas de materia orgánica de las municipalidades*; v) la no comprensión de la cosmovisión, usos y costumbres de las comunidades, que precisamente los diferencia de las comunidades occidentales que fueron reubicadas.

Para la Corte la interdependencia del derecho fundamental al acceso al agua potable tiene por efecto que si este es afectado, automáticamente se vulneran los derechos fundamentales y colectivos a vida y salud de la comunidad tribal, que además aparece el quebrando a su identidad cultural y libre desarrollo de las comunidades afrodescendientes de Patilla y Chancleta, ello por cuanto el significado del agua es de carácter cultural, social, y ancestral, necesario para su existencia como pueblo, pues se reconocen como campesinos con procesos productivos en zona rural.

En este caso la empresa accionada tiene el deber de adoptar medidas de compensación ambiental mitigar la explotación del recurso hídrico, debe prevenir y reducir la exposición de la comunidad a factores ambientales contaminantes. A su vez las autoridades ambientales tienen la obligación de controlar y vigilar las reservas de agua superficiales subterráneas, pues el bombeo masivo genera *el agotamiento de los acuíferos que actualmente proveen de agua a la población.* Para la Corte las autoridades ambientales incumplieron con su deber de seguimiento periódico y efectivo respecto de las actividades de explotación de carbón.

En virtud de lo anterior la Corte ordenó la adopción de medidas transitorias, adecuadas y necesarias para asegurar un mínimo de acceso, disponibilidad y calidad de agua potable para los miembros de las comunidades accionantes; así como el diseño de un plan definitivo que asegure en favor de todas las comunidades indígenas y tribales que habitan en el Sur del departamento de La Guajira,

el acceso, la calidad y la disponibilidad del servicio público esencial de agua potable.

Siendo necesario diseñar *modelos de gestión del agua que garanticen una explotación sostenible, una distribución equitativa y la atribución de responsabilidades para la restauración o sustitución morfológica y ambiental del suelo intervenido con la explotación*, puesto que la explotación no puede darse en cantidades mayores y a un ritmo superior al de la recarga natural de los acuíferos, tampoco debería permitirse el desvío de ríos o arroyos ante una afectación del recurso, del ambiente y de la vida humana.

5. CONTEXTO GEOGRÁFICO, SOCIAL Y ECONÓMICO DEL RÍO RANCHERÍA

Es relevante comprender que los retos grandes que tiene La Guajira en materia de agua obedecen a distintas causas, unas geográficas como lo es la falla geológica de la Oca que hace miles de años generó, a través de procesos geológicos, un redireccionamiento del cauce del río Ranchería hacia el oeste del departamento de La Guajira (hacia Riohacha), modificando así su cauce hacia el norte del mismo, otras derivadas de las condiciones climáticas naturales de la región y los periodos estacionales ordinarios, pues la oferta hídrica es diferente si se trata de la alta, media o baja Guajira por las condiciones topográficas y geológicas que hacen que las fuentes hídricas que mantienen agua siempre no discurren por todo el departamento (condición natural), por lo que requieren de un desarrollo de infraestructura para la captación, tratamiento y distribución del agua para asegurar el abastecimiento a todos los habitantes de todos el departamento.

El río Ranchería es una corriente fluvial de inmensa importancia para todos los habitantes del departamento de la guajira, teniendo una relación directa con al menos el 22,53% de su población, esto es, aproximadamente 228.000 personas.¹⁵ No solo es la principal corriente fluvial del territorio ancestral wayú, para las comunidades y el pueblo indígena que lleva el mismo nombre, sino que, es también la principal corriente de carácter permanente, pues los arroyos que se encuentran en la Alta Guajira, a pesar de que son caudalosos, solo llevan agua en invierno.¹⁶

El río nace en la Sierra Nevada de Santa Marta, en el Páramo de Chirigua, abarcando 248 kilómetros y pasa por los municipios de Distracción, Fonseca, Barrancas, Hatonuevo, Maicao, Albania, Manaure y Riohacha. La cuenca del río Ranchería cuenta con una superficie de 4.070 km² de extensión, está

¹⁵ GUAJIRA 360. Visión simbólica y espiritual de la Cuenca del río Ranchería desde los Universos Culturales Wiwa-Kogi [diapositivas]. PowerPoint. 2017. [Consultado 14 de agosto de 2022]. Disponible en: <https://guajira360.org/wp-content/uploads/2017/12/Visi%C3%B3n-Simbol%C3%ADca-y-ESpiritual-de-la-Cuenca-del-Rio-Rancher%C3%ADa-2017.pdf>

¹⁶ GUERRA, Weilder. Conferencia Historia del agua: biografía del Río Ranchería [video]. Montería (Colombia): Youtube, Banco de la República. (22 de julio de 2022). 57:37 minutos. [consultado: 14 de agosto de 2022]. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=2lgIDY9QY4c&t=1736s>

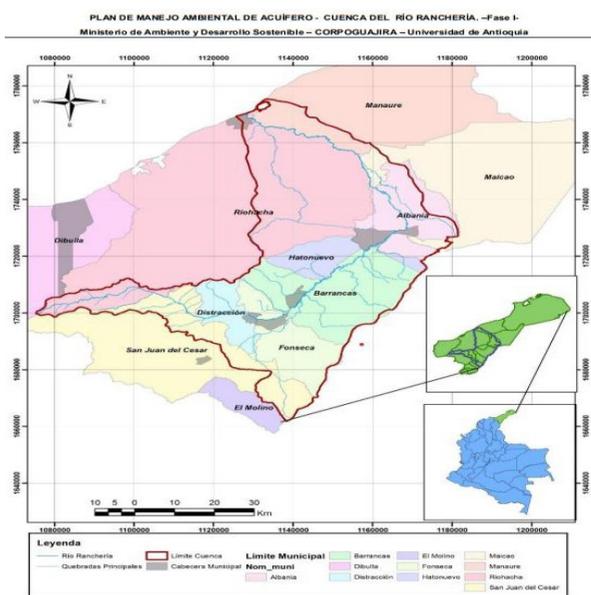
localizada en la parte media y baja del departamento de La Guajira.

Corpogujira lo delimita así: “desde la cabecera sur oriental de la Sierra Nevada de Santa Marta, discurriendo por sus estribaciones hasta el corredor del Valle de Upar bordeando las estribaciones de la Sierra Nevada hasta bordear los Montes de Oca y de allí tomando rumbo norte hacia su desembocadura en el Caribe, concomitante con la ciudad de Riohacha”.¹⁷

La cuenca del río está dividida en tres partes, Alta, Media y Baja. La parte Alta tiene un relieve de colinas altas que se extiende hasta la planicie aluvial del río, la media limita en su costado por la serranía del Perijá y en su costado norte por faldas de la Sierra Nevada de Santa Marta. La cuenca Media y Baja del Río son deficitarias en agua, y tienen suelos ácidos y semiáridos, con pocas posibilidades para el cultivo.¹⁸

En las zonas de la Alta Guajira se ubica la zona desértica más extensa del país, lo que genera una escasez permanente de agua y alimentos, condicionan su desarrollo económico y social, y simultáneamente se les dificulta el acceso a la prestación de bienes y servicios públicos.

Figura 1. Límites del río Ranchería y de la cuenca.



Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Corpogujira y Universidad de Antioquia. (2013)¹⁹

¹⁷ Arteta, R., & Lázaro, L. 2016. Diagnóstico socioambiental del bosque seco subtropical de la cuenca del río Ranchería, La Guajira, Colombia. Bol. Cient. Mus. Hist. Nat. U. de Caldas, 20 (2): 57-81. <https://doi.org/10.17151/bccm.2016.20.2.5> [consultado: 21 de abril de 2024].

¹⁸ Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Corpogujira, & Universidad de Antioquia. (2013). Plan de manejo ambiental de acuífero. Cuenca del río Ranchería. Fase I. Informe final. Convenio interadministrativo 143 de 2013. Grupo de Ingeniería y Gestión Ambiental -GIGA-, Facultad de Ingeniería, Universidad de Antioquia. Disponible en https://www.corpogujira.gov.co/web/attachments_Joom/article/1180/Informe%20Final%20PMMA%20Fase%20I.pdf

¹⁹ Ídem.

El delta fluvial es de gran valor para el ecosistema, pues propicia el crecimiento de los manglares, los cuales son claves para el desarrollo de la fauna que habita las zonas costeras, teniendo en cuenta que estos terrenos sirven de alimento, anidación y refugio para diferentes especies.²⁰

Ahora bien, la importancia del río va más allá de su topografía, hace parte de la historia de las comunidades étnicas e indígenas que han habitado a su alrededor desde hace varios siglos.

Durante los siglos XVII y XVIII, el área Baja y Media del río fue atractiva para extranjeros que se beneficiaron de la cría de ganado y la obtención de palo de tinte, exportándolo a países como Jamaica, Curazao, Inglaterra y Holanda. Los nativos adoptaron nuevos complejos tecnológicos con artefactos antes desconocidos, como herramientas de metal y la utilización de trapiches. Así se fue introduciendo el ganado vacuno, caballar, porcino y ovino.²¹

Por la fertilidad de las tierras ribereñas, especialmente las situadas en Fonseca y Distracción, los migrantes extranjeros vieron en el río Ranchería un espacio de desarrollo, especialmente Ramón Penso, quien construyó un canal de 3 kilómetros de extensión en Fonseca, además de un molino de agua para impulsar su trapiche. Es también el caso del alemán Joseph Traxler, quien introdujo el cultivo tecnificado del arroz en el valle del Medio Ranchería, específicamente en tierras del actual municipio de Distracción.²²

El río ha servido como frontera, en el siglo XIX, cuando la población en ascenso de Riohacha estimuló la ocupación del curso medio de Ranchería. Uno de estos grupos fueron los ‘joskoyuu’, quienes ocuparon las realengas, enfrentándose con el pueblo wayú por estos territorios. Estos conflictos se dieron alrededor de las riberas de esta corriente, las cuales servían como línea fronteriza entre los dos grupos.

En más de una ocasión ha sido azotado por el conflicto en Colombia, ha sido utilizado como escenario de cultivos de marihuana y cocaína, ha visto la aparición de frentes de la guerrilla y ha padecido la llegada de grupos armados irregulares y guerras entre las autodefensas. A su alrededor se han dado diversas masacres contra la población indígena, como la masacre de El Limón en 2002, y de Potrerito, Las Mercedes y La Laguna en 2003.²³

²⁰ Corpogujira. Corpogujira issues guidelines for cleaning the beaches and Rancherís river delta in Riohacha [sitio web]. Riohacha. [consultado: 14 de agosto de 2022]. Disponible en: <https://corpogujira.gov.co/wp/corpogujira-emite-lineamientos-para-limpieza-de-playas-y-delta-del-rio-rancheria-en-riohacha/?lang=en>

²¹ GUERRA, Weidler. Conferencia Historia del agua: biografía del Río Ranchería [video]. Montería (Colombia). Youtube, Banco de la República. (22 de julio de 2021). 57:37 minutos. [consultado: 14 de agosto de 2022]. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=2lgIDY9QY4c&t=1736s>

²² Ibid.

²³ Ibid.

Es necesario resaltar también, el papel que juega el río en los habitantes de la zona, tanto en su supervivencia como su tradición cultural y espiritual con las aguas. Las comunidades que habitan las distintas partes del río son diversas, como los pueblos indígenas koguis y wiwas de la Sierra Nevada, quienes se encuentran ubicados en el nacimiento del río. También está el pueblo indígena wayú, que constituye gran parte de su población. Además, habitan la zona los pueblos Yupka, Arhuaco, Kinki, Ika, Malayo y Kankuamo. En adición, se encuentran en la región los criollos o mestizos que viven principalmente en los asentamientos urbanos, la población afrodescendiente, los euroasiáticos o “turcos”.

El Pueblo wayú es el pueblo indígena más numeroso del país, concentrándose principalmente en la media y alta Guajira, su existencia y poblamiento está condicionada por las escasas lluvias y pozos subterráneos. De acuerdo con el censo población del año 2018²⁴, Colombia tiene una densidad poblacional de 48.258.494 de personas, de las cuales 825.364 se encuentran ubicadas en el departamento de La Guajira. Del total de la población de La Guajira el 47,8% se auto reconoció como población indígena, equivalente a 394.683 personas y el 0,01% equivalente a 93.748 como población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera.

Como asegura Indepaz, “*todos ellos han establecido lazos históricos de carácter económico y cultural con el río Ranchería*”²⁵, además, de ser un lugar pedagógico, “*pues los menores aprenden allí cuestiones fundamentales para su relación con el entorno, con su historia y con su tradición espiritual*”.²⁶

La tradición espiritual fuertemente arraigada a este río se evidencia claramente con la llamada “línea negra”. Esta es una delimitación ancestral que los pueblos indígenas hacen de su territorio mediante líneas imaginarias, que se denominan ‘negras’ o también de ‘origen’, las cual unen al cerro Gonawindua (Pico Bolívar) con accidentes geográficos o con hitos considerados sagrados.

Según la cosmovisión de los pueblos Arhuaco, Gogui, Wiwa y Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta, los espacios y recursos que componen la Línea Negra, representan un tejido de conectividades y relaciones que integran su territorio a los principios de la vida, el planeta y el universo²⁷. Dentro de estas

delimitaciones se encuentran lugares con fuerte carga espiritual, como puede ser un río, donde las autoridades de la población indígena llevan a cabo pagamentos, es decir, unos rituales que contribuyen al sostenimiento del equilibrio entre las diferentes formas de vida y el medio ambiente.²⁸

Con el Decreto número 1500 de 2018 el Estado colombiano reconoció la cartografía oficial de la Línea Negra o Sezhiya (Hilo o conexión de los sitios sagrados); de la mano de las comunidades identificar 348 sitios considerados como “sagrados” a lo largo del trazado de la Línea Negra.

Figura 2. Límites y sitios sagrados de la Línea Negra



Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, (2023).²⁹

La influencia del río Ranchería en la supervivencia, educación, cultura, tradición histórica y calidad de vida de los habitantes de la zona ha sido constante a lo largo de los años. Es un centro de vida, de esparcimiento, de formación y de memoria, el cual se ha enfrentado a serias problemáticas que lo amenazan día a día.

Las diversas actividades humanas han tenido fuertes implicaciones en el río Ranchería. Debido a la distinta naturaleza de las coyunturas pasadas y presentes, se pueden encontrar problemáticas comunes a grandes esferas: social, ambiental, cultural, y sanitaria.

5.1. Crisis Humanitaria por falta de agua en La Guajira - Estado de Cosas Inconstitucional

“*La crisis humanitaria que se vive en este departamento se debe a una variedad de factores que afectan la realidad no solo de los 15 municipios, sino también del pueblo indígena wayú, diseminado en más de 15.000 km² a lo largo de La Guajira. La problemática que aqueja, como nunca antes, a la*

²⁴ <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018/cuantos-somos>

²⁵ Indepaz. El río Ranchería. Pérdido en el Desierto. Informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. Bogotá: Indepaz; 2013. [Consultado: 14 de agosto de 2022]. Disponible en: <http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2020/05/Revista-Rancheria.pdf>

²⁶ Ibid., p.16.

²⁷ GUERRA, Weildler. Conferencia Historia del agua: biografía del río Ranchería [video]. Montería (Colombia). Youtube, Banco de la República. (22 de julio de 2021). 57:37 minutos. [consultado: 14 de agosto

de 2022]. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=2lgIDY9QY4c&t=1736s>

²⁸ CRUDO TRANSPARENTE. La Línea Negra: un amparo para la conservación y protección de la Sierra Nevada. s.f. [Consultado: 14 de agosto de 2022]. Disponible en: <https://crudotransparente.com/2020/09/02/la-linea-negra-un-amparo-para-la-conservacion-y-proteccion-de-la-sierra-nevada/>

²⁹ Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC. (2023). Mapa: Territorio Ancestral de los Pueblos Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. <https://www.colombiaenmapas.gov.co/#>

población indígena se deriva por fenómenos como: desnutrición, carencia de agua potable, deficiencia en la prestación de servicios públicos, red hospitalaria desecha, constante presencia de grupos armados ilegales, hacinamiento, falta de vivienda y desnutrición global, entre otros. Hoy por hoy, la falta de agua en La Guajira constituye un ingrediente para comprender su grave crisis humanitaria. La situación de abastecimiento de agua en esa región es crítica ya que no hay una garantía mínima por parte del Estado del derecho fundamental al agua, es decir, no hay políticas claras que den una verdadera solución al tema, generando un aumento en los índices de pobreza, desnutrición, enfermedades catastróficas, imposibilidad de desarrollo e insatisfacción de mínimas necesidades básicas.” (Sentencia T-256/15) (negrillas propias).

Los problemas expuestos y relacionados con el río Ranchería como fuente hídrica principal encuentran directo asidero con las problemáticas del acceso al agua potable que tienen las comunidades en general, y en especial el pueblo indígena wayú y las comunidades afrodescendientes que dependen de esta fuente hídrica.

La grave situación provocó que en el año 2017 por medio de la Sentencia T-302-17, la Corte Constitucional colombiana declaró un *estado de cosas inconstitucionales (ECI)* “(...) por la vulneración sistemática y generalizada de los derechos constitucionales de los niños y niñas wayú, que tuvo como consecuencia la muerte de más de 4.770 menores por causas asociadas a desnutrición”.³⁰ En este fallo se emitieron 210 órdenes para que 25 instituciones trabajaran por la protección de los derechos del pueblo wayú al agua, la alimentación y la salud, entre otros.

La Corte Constitucional reconoció la existencia de una vulneración gravísima de derechos humanos fundamentales que han sido conculcados de indefinidamente en el tiempo, de manera generalizada, injustificada y proporcionada, ante la ausencia de políticas públicas efectivas, adecuadas y pertinentes culturalmente para garantizar los derechos al agua, a la alimentación, a la seguridad alimentaria, a la salud y a la vida de los niños y niñas del pueblo wayú y a las madres gestantes y lactantes. Circunstancia que no solo son el resultado de omisiones de entidades estatales sino de particulares con competencia en la materia.

En abril de 2023, la Sala de Seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional³¹

³⁰ DEJUSTICIA. 5 años del Estado de Cosas Inconstitucional en La Guajira: ¿Qué ha cambiado? Informe disponible en: <https://www.dejusticia.org/5-anos-del-estado-de-cosas-inconstitucional-en-la-guajira-que-ha-cambiado/>

³¹ <https://www.corteconstitucional.gov.co/noticia.php?Sala-de-Seguimiento-a-la-Sentencia-T-302-de-2017-realizó-una-inspección-judicial-durante-cinco-días-en-21-comunidades-de-la-Media-y-Alta-Guajira,-con-el-fin-de-verificar-el-cumplimiento-de-las-órdenes-allí-dadas-en-la-ruta-de-la-protección-Wayuu-9501>

realizó inspección judicial en 21 comunidades indígenas de los municipios de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao, de la Media y Alta La Guajira, para verificar el cumplimiento de las órdenes impartidas en el fallo para remediar los problemas estructurales que afectan los derechos fundamentales de la niñez Wayuu, sin embargo, se encontraron varios menores en estado de desnutrición, se elevaron denuncias sobre el subregistro de niños y niñas fallecidos por estas causas, advirtieron fallas en las soluciones hídricas, existe poca frecuencia de los carros cisternas y los pozos y jagüeyes están en mal estado; se reportaron problemas en el suministro de alimentos, ausencia de personal médico y equipo especializado para la atención extramural; falta de infraestructura vial, así como ausencia de oferta institucional del Estado colombiano.

Mediante Auto número 310 del 19 de febrero de 2024, la Corte Constitucional reprochó que no existe una ruta eficaz para el reporte de la información financiera de forma oportuna y adecuada, además del desinterés y falta de consciencia de las entidades en su obligación de reporte, sin que tampoco existan indicadores para medir el cumplimiento el impacto las soluciones en el goce efectivo de los derechos protegidos, ni existen acciones para prevenir la corrupción, en consecuencia declaró el incumplimiento del objetivo sexto de “garantizar la imparcialidad y la transparencia en la asignación de beneficios y en la selección de contratistas” y citó a sesión de seguimiento para el 15 de abril de 2024 que puede consultarse en el siguiente link:

https://www.youtube.com/watch?v=XLsvOv_sFWU

Los esfuerzos gubernamentales para solucionar los problemas de acceso al agua palidecen ante la ausencia de resultados;³² durante el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos se construyeron 29 pozos desalinizadores pero en su mayoría están fuera de servicio por falta de mantenimiento; en el Gobierno del presidente Iván Duque se anunció el programa Guajira Azul, pero de 24 pilas públicas solo quedaron 4 en funcionamiento al final del periodo; en el Gobierno del presidente Gustavo Petro se expidió el Decreto número 1250 de 2023 que buscaba garantizar el acceso al agua en el departamento de La Guajira, sin embargo, en marzo de 2023 la Corte Constitucional lo declaró inexecutable porque excedía las competencias del Congreso de la República.

Más recientemente, tras la adquisición cuestionada por presuntos sobrecostos de 40 carrotaques para transportar agua potable a diversas zonas del departamento de La Guajira, donde la topografía dificulta el acceso de estos vehículos, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de Desastres emitió la Circular 022 del 2 de abril de 2024; esta circular establece el control y la certificación de los vehículos cisterna utilizados para el transporte de

³² <https://cambiocolombia.com/contenido-especial/agua-potable-el-sueno-frustrado-de-la-guajira>

agua potable, modificando, además, la distribución del agua de acuerdo a las indicaciones del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de La Guajira y la Gobernación, quienes deberán considerar necesidades de las comunidades wayú y coordinar con las autoridades locales³³.

Siete años después de la declaratoria de estado de cosas inconstitucional no se avizora una solución estructural, de fondo, y adecuada en el corto, mediano o largo plazo que garantice la protección de los derechos fundamentales a la salud, al agua potable, a la alimentación y a la seguridad alimentaria de los niños y niñas del Pueblo wayú para superar esta crisis humanitaria.

Sin embargo, se hace necesario resaltar que el sector privado es un actor estratégico e importante para contribuir a implementar soluciones para mejorar la accesibilidad, disponibilidad y calidad de agua para las comunidades implica una serie de retos derivados de las condiciones geográficas y culturales del departamento de La Guajira.

Ejemplo de ello es el **Tren del Agua** que la empresa Cerrejón desarrolló para contribuir en las soluciones a la problemática de escasez de agua en las comunidades del área de influencia. Para su funcionamiento se utiliza la misma línea férrea de Cerrejón, que cruza casi 150 km de La Guajira, lo que permite alcanzar a muchas de las comunidades que se localizan en el área de influencia del tren beneficiando a las comunidades que no tendría ninguna otra forma de acceder al agua.

Desde el 2014 que está en funcionamiento, el tren del agua ha entregado a las comunidades más de 300 millones de litros de agua potable y cerca de 60 millones de litros de agua en 2023.

Abastecimiento de agua a las comunidades a través del Tren del Agua



5.2. Problemática específica relacionada con el arroyo Bruno

El arroyo Bruno está ubicado entre los municipios de Albania y Maicao, al sur de La Guajira. Nace a

420 metros de altitud, en la zona alta de la Serranía del Perijá dentro de la reserva natural de los Montes de Oca, recorre una dirección de Sureste a Noreste por 21 km aproximadamente, hasta desembocar en el río Ranchería, siendo un corredor biológico para la Serranía del Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta.³⁴

Abastece de agua a comunidades, en su mayoría afrodescendientes y por lo menos 34 comunidades wayú, las cuales se encuentran asentadas en la cabecera del municipio de Albania. Cerca de este arroyo viven aproximadamente 300 personas, distribuidas desde la comunidad de Tigre Pozo a La Horqueta 2.

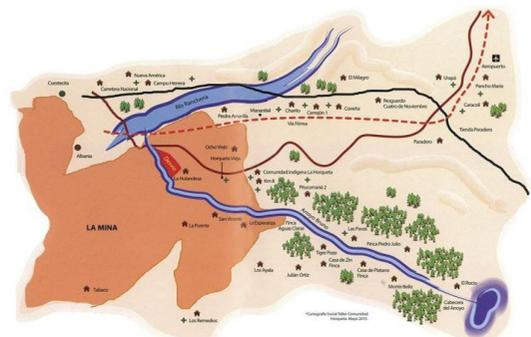


Figura 1. Mapa del arroyo Bruno

De acuerdo con el contexto analizado por la Corte Constitucional en Sentencia SU-698 de 2017, el proyecto de desviación del arroyo Bruno se desarrollaría en el territorio del departamento de La Guajira que enfrenta serias dificultades hídricas; según el “Informe sobre el estado de los Recursos Naturales y del Ambiente 2015-2016” de la Contraloría General de la República, más del 75% del territorio guajiro está desertificado debido a las bajas tasas de precipitación y a las condiciones topográficas desfavorables que dificultan la captación y almacenamiento del agua.

“El arroyo, considerado por el antiguo Esquema de Ordenamiento Territorial de Albania^[31] como de “gran potencial hídrico” para “(...) solucionar los problemas de abastecimiento de agua para consumo humano de la población asentada en Manaure, Albania, Maicao y Uribia, debido a su caudal y poca contaminación”, es igualmente significativo desde el punto de vista de los otros servicios ecosistémicos que presta a la comunidad. El mismo instrumento, señala que “(...) la población asentada en la ribera de la microcuenca del arroyo Bruno, está constituida por campesinos propietarios de pequeñas áreas de tierra, afrocolombianos y algunos indígenas wayú dedicados a la agricultura y cría de ganado vacuno, caprino, ovino. Entre los cultivos se destacan el maíz, frijol, guineo, caña blanca y de azúcar, ají, tomate, y, algunos frutales. El tipo de agricultura es de pancoger. (...) La parte baja de la microcuenca del arroyo Bruno, presenta ganadería de tipo extensivo a ambos lados del curso. La vegetación de ribera, de poco espesor, está representada por árboles dominantes con alturas cercanas a los 25 metros que forman un dosel continuo. La regeneración

³³ <https://www.bluradio.com/nacion/tras-escandalo-de-carrotanques-ungrd-cambiara-modelo-de-distribucion-de-agua-en-la-guajira-rg10>

³⁴ Corte Constitucional SU698-17, ver numeral 1.1.7

de este dosel ha desaparecido para dar paso a la implantación de pastos que llegan hasta la margen del arroyo. (...) En la parte alta de la microcuenca, donde la actividad agrícola es de tipo migratorio, [el arroyo está rodeado de bosques primarios de gran tamaño, donde predominan el cedro, ceiba, caracolí, roble, higuerón etc.] (...)”.

Comprende entonces la Corte Constitucional que el arroyo Bruno es crucial para la región. Sin embargo, su intervención plantea una controversia debido a su importancia ambiental y su papel en el abastecimiento de agua en una región altamente vulnerable.

Las comunidades indígenas de La Horqueta, La Gran Parada y Paradero interpusieron acción de tutela contra Carbones del Cerrejón Limited, Mininterior, Corpogujaira, ANLA y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. La acción argumentaba que, el proyecto de desviación del arroyo Bruno en La Guajira, que había diseñado la empresa Carbones del Cerrejón para avanzar en el tajo minero La Puente, vulneraba el derecho a la consulta previa de estas comunidades al no haber participado en su estructuración y ejecución, además de su derecho a la igualdad, pues sí se les consultó a las comunidades de la etnia y pueblo wayú. También porque vulneraba sus derechos al agua, seguridad y soberanía alimentaria y a la salud, pues la intervención en el arroyo acarrea graves consecuencias ambientales y sociales para todas las comunidades dentro de su zona de influencia.

En sala de revisión, la Corte Constitucional estableció que la satisfacción del derecho al agua, la alimentación y la salud también se realiza asegurando que el ecosistema pueda seguir suministrando a las comunidades los servicios de los que históricamente ha venido dependiendo. Encontró que el diseño de la desviación del arroyo quedó en el marco del proyecto de explotación carbonífera que fue objeto de una concesión minera en 1983, y que, en virtud del régimen de transición de la Ley 99 de 1993, no le fue necesaria una licencia ambiental, sino un Plan de Manejo Ambiental que elaboró la misma empresa.

Para el alto Tribunal Constitucional la desviación del arroyo Bruno converge diferentes incertidumbres que deben dilucidarse primero antes de su ejecución:

A. Incertidumbres asociadas al contexto

- *Las características y el estado del ecosistema en el que se inscribe la desviación del arroyo Bruno, es decir, del bosque seco tropical, y de la cuenca del río Ranchería;*
- *El impacto del fenómeno del cambio climático y del calentamiento global en el departamento de La Guajira, en el bosque seco y en la cuenca del río Ranchería;*

- *Las intervenciones que históricamente ha efectuado Cerrejón en el territorio en el que se propone la desviación del arroyo Bruno, así como las que tiene proyectado realizar, teniendo en cuenta los efectos acumulativos y residuales que todas estas producen”.*

B. Incertidumbres asociadas a los impactos ecosistémicos que se generarían con la desviación parcial del cauce del arroyo Bruno, en particular,

- *La garantía de las funciones culturales, de abastecimiento, regulación y mantenimiento que cumple el arroyo;*
- *El impacto aguas arriba que podría tener la desviación de arroyo;*
- *El impacto a la oferta hídrica que generaría la remoción de los acuíferos en los que reposa el cauce actual y la realineación de las aguas superficiales en otro canal de condiciones geomorfológicas distintas, y que carece actualmente de un bosque de galería, y, finalmente,*
- *El valor biológico de la cuenca del arroyo Bruno en el contexto del Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica del río Ranchería como del Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Albania”.*

Según lo consideró la Corte, estas incertidumbres amenazan los derechos fundamentales al agua, a la seguridad alimentaria y a la salud de las comunidades accionantes y de las comunidades dependientes del arroyo Bruno. Razón por la cual en su ordinal quinto del resuelve de la SU-698 de 2017, y posterior al estudio de las incertidumbres del proyecto resolvió:

“QUINTO. ORDENAR a la mesa interinstitucional referida en los numerales anteriores que, además de cumplir con las funciones ordenadas por el Tribunal Administrativo de La Guajira y el Consejo de Estado, **realice un estudio técnico completo que ofrezca una respuesta informada a las incertidumbres e interrogantes contenidos en el capítulo de esta providencia denominado “Incertidumbres sobre los impactos ambientales y sociales del proyecto de modificación parcial del cauce del arroyo Bruno”, de manera que se pueda valorar su viabilidad ambiental. Para el cumplimiento de lo anterior, dentro del mes siguiente a la notificación de la presente sentencia, la mesa deberá diseñar un cronograma detallado y razonable de sus actividades, así como del responsable específico de cada una de ellas.**” (Negrillas propias)

Es así como la Corte decidió ordenar la conformación de una mesa interinstitucional integrada por la empresa, agencias gubernamentales como el Ideam, ANLA, ANM, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Agencia Nacional de Tierras y también instancias de la sociedad civil y académicas. En esta mesa se le debía dar participación a las comunidades, reconociendo su derecho a la participación, y su conocimiento ancestral del entorno natural que permite determinar los efectos ambientales del proyecto.

También le exigió a Cerrejón que, una vez se creara el Plan de Manejo Ambiental Integral pusiera en marcha todas las medidas para mitigar, controlar, compensar y corregir los impactos sociales y ambientales del proyecto, y mantener informada a la mesa interinstitucional. No obstante, solo hasta

2019, el pueblo wayú fue invitado a hacer parte de este espacio, participando solo en dos ocasiones más. Por eso decidieron levantarse de la mesa (*El Espectador*, 2022).

Respecto a las comunidades afectadas por el desvío del cauce, a finales de agosto del 2021, organizaciones como el Cinep, Censat y Cajar, les realizaron una visita de verificación, donde encontraron que se había reanudado e intensificado la extracción minera cerca al tajo La Puente, contradiciendo la suspensión ordenada por la Corte Constitucional, mientras se realizaba el estudio de impacto social, ambiental y cultural de la obra respecto de la zona.

La preocupación de las comunidades y quienes denunciaron estas actividades se reduce a lo siguiente³⁵:

El miércoles de esta semana, según los denunciantes, llegó un correo electrónico enviado por Andrea Corzo Álvarez, directora de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana del Ministerio de Ambiente en el que envía la versión final del estudio de la mesa que, según diría la comunicación, daría por satisfecho el propósito de la sentencia de la Corte. (...) Según manifiestan las comunidades y las personas que realizan el plantón, el desvío del cauce del arroyo Bruno habría recibido la “luz verde” por parte de la mesa. Esto, denuncian, a pesar de que no han contado con participación real y efectiva en ese espacio.

De acuerdo con el informe de la Contraloría General de la República³⁶ en 2022, las entidades vinculadas al cumplimiento de la Sentencia SU-698/17 y T-614/17 no han mitigado la vulneración de los derechos a la salud, al agua, a la seguridad alimentación, al ambiente sano de las comunidades afectadas por la desviación del arroyo Bruno y las operaciones mineras de la empresa Carbones del Cerrejón Limited.

Dentro de sus hallazgos identificó falencias en el cumplimiento de las ordenes cuarta (espacios de participación), quinta (estudio técnico para determinar la viabilidad ambiental del proyecto), octava (medida provisional para restablecer el paso de agua del arroyo a su cauce natural) y novena (suspensión de obras) de la Sentencia SU 698/17, relacionadas con el proyecto de desviación del arroyo Bruno en La Guajira y que tienen como entidades accionadas al MADS, la ANLA y Corpoguajira.

También determinó el hallazgo por fallas en el cumplimiento de la orden sexta de la Sentencia T 614/19, respecto de la implementación de un sistema de medición de la calidad de aire en el Resguardo Indígena Provincial y la calidad de agua en la sfuentes hídricas que lo abastecen, y que tienen

como entidades accionadas al MADS, la ANLA y Corpoguajira.

En este punto debe resaltarse nuevamente que, para la Contraloría General de la República no se ha dado cumplimiento, y, por consiguiente, no se ha solucionado las incertidumbres asociadas al proyecto, ni se ha solucionado el acceso al agua potable.

5.3. Contaminación del río Ranchería y sus fuentes hídricas

De acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial de la Cuenca del río Ranchería³⁷, las comunidades de los municipios que se bañan del río Ranchería a saber, Barrancas, Albania, Hatonuevo, Maicao, Fonseca, Distracción, San Juan, y Riohacha, les aprestan diferentes preocupaciones dentro de las que encuentran la disminución del cauce del río Ranchería, la deforestación, la contaminación del agua, la construcción arbitraria de represas, la falta de entendimiento entre entidades territoriales y la comunidad, y la afectación a las prácticas económicas tradicionales, conflictividad social relacionada con presunta expropiación de tierra, el uso de agroquímicos, la escasez de agua para cultivos y el manejo inadecuado de residuos sólidos. Todas estas preocupaciones se constituyen como desafíos significativos conservación ambiental y sostenibilidad en la región del río Ranchería.

De acuerdo con Indepaz³⁸, en la cuenca del río Ranchería, el 74.5% del agua subterránea se destina a uso doméstico, con impactos significativos en las comunidades, razón por la cual su sobreexplotación y contaminación representa un riesgo para el agua subterránea. Refiere que la actividad minera ya ha alterado los ciclos hídricos naturales del río y ha disminuido los caudales, representando amenazas para la disponibilidad continua.

La importancia de las aguas subterráneas en el departamento de La Guajira lo resume la Corte Constitucional así:

“Así pues, las aguas subterráneas resultan estratégicas no solo porque pueden proveer directamente el recurso hídrico, sino también porque conforman con las aguas superficiales una simbiosis única en la que se produce un intercambio permanente entre unas y otras. En este contexto, en el departamento de La Guajira se han suplido las carencias del recurso hídrico con la construcción de pozos profundos para la extracción de agua potable en las rancherías, a través de aljibes y casimbas, los cuales se constituyen en el único medio para obtener agua en época de verano, pero con las limitantes que se secan o que en algunos casos el agua es muy salobre y poco apta para el consumo humano”. (SU-698/17).

³⁵ <https://www.elespectador.com/ambiente/blog-el-rio-arroyo-bruno-la-guajira-ante-posible-aval-a-desviacion-comunidades-protestan/>

³⁶ <https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2023/03/Informe-CGR-AdC-Sent-Arroyo-Bruno-y-Cerrejon.pdf>

³⁷ http://201.130.16.43/bitstream/handle/20.500.11762/22606/31_Tomo_8_Resumen_ejecutivo.pdf?sequence=5&isAllowed=y

³⁸ <http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2020/05/Revista-Rancheria.pdf>

De acuerdo con el recuento jurisprudencial relatado en acápite anteriores, en los diferentes casos que han sido analizados por la Corte Constitucional, el Alto Tribunal ha advertido diferentes impactos ambientales asociados al río Ranchería y sus afluentes, debiendo destacarse por su importancia:

- No hay abastecimiento de agua en la comunidad de manera continua y suficiente para las comunidades que dependen de estas fuentes hídricas;

- El agua que llega a las comunidades no es apta para consumo humano, es insalubre ya que contiene porcentajes de sales;

- Existen barreras físicas para acceder al agua en condiciones de igualdad;

- **Se comprobó la contaminación del río Ranchería por coliformes fecales producto de descargas de materia orgánica de las municipalidades.**

Entre otros impactos ambientales asociados a las actividades mineras en el departamento de La Guajira, la Corte Constitucional comprobó la presencia de:

- Hay presencia de sustancias químicas en el aire, como azufre, cromo, cobre y zinc;

- Se encontró presencia de polvillo de carbón o material particulado en el aire de las comunidades;

- Hay presencia de sustancias químicas asociadas a los incendios de los mantos de carbón;

- Existe aumento progresivo de material particulado PM10 en las zonas aledañas;

- Concentraciones de PM10 que superan los niveles exigidos por la OMS;

- Hay emisión constante de polvillo que cae sobre la comunidad;

- **Existe contaminación de cuerpos de agua y vegetación por malos manejos de aguas de escorrentía;**

- **Hay presencia de sedimentos contaminantes en las fuentes de agua superficiales y subterráneas de la comunidad;**

- **Se encontró la desaparición y alteración de cauces y acuíferos;**

- **Hay incumplimiento en las normas de vertimientos;**

- **Hay presencia de residuos líquidos aceitosos en el río Ranchería;**

- **Hay vertimientos sin permiso en el río Ranchería;**

- Existe afectación a la flora por la polución y material particulado;

- Existe exceso de ruido por las explosiones y actividad de maquinaria;

- Hay altas concentraciones de metales en sangre y daño en células de pobladores;

- Se comprobaron afecciones pulmonares, respiratorias en la población.

En palabras de la Defensoría del Pueblo, las afectaciones son el resultado de la contaminación del aire, del agua, de los cuerpos del agua, impactos ocasionados por la cercanía a las actividades mineras.

5.4. Problemáticas de tipo cultural y socioeconómico

El contexto del departamento de La Guajira no puede entenderse sin el reconocimiento del flagelo de la guerra y la situación de desplazamiento forzado a la que se ha visto sometida el pueblo wayú, siendo también causa de procesos de aculturación.

La Corte Constitucional en el Auto número 004 de 2009, declaró que 34 pueblos indígenas, entre ellos el wayú *en peligro de ser exterminados cultural o físicamente por el conflicto armado interno, y han sido víctimas de gravísimas violaciones de sus derechos fundamentales individuales y colectivos y del Derecho Internacional Humanitario, todo lo cual ha repercutido en el desplazamiento forzado individual o colectivo de indígenas.*

La violencia ha marcado a los grupos humanos que habitan la región por siglos, y se han presentado agresiones en el marco de eventos legales e ilegales que agobian a estas poblaciones.

Pueblos como el Wiwa han sido golpeados por el conflicto armado y han sufrido la llegada de guerrillas y paramilitares, encontrándose en el medio de una disputa territorial entre grupos armados. En el Auto número 004 de 2009, la Corte Constitucional catalogó el territorio Wiwa como un “teatro de la guerra” siendo un “corredor estratégico para el transporte de armas y drogas”³⁹.

Así mismo debe comprenderse que La Guajira ha sido un territorio minero, en la década de 1970, el Gobierno colombiano firmó un contrato con la empresa International Colombia Resources Corporation (Intercor), para la explotación y exploración de la mina que se encuentra en la cuenca del río Ranchería, hoy conocida como Cerrejón. En 2001, Colombia vendió su participación, que era del 50%, lo que supuso que la mina pasaría a ser operada exclusivamente por empresas transnacionales.

La exploración y extracción de carbón ha sido un factor determinante en el deterioro de los afluentes que tiene el departamento de La Guajira. Esto se debe, entre otras razones, a que el 7.22% de la extensión total del departamento está titulada para explotación minera, y del total de las exportaciones de carbón colombiano, el 37% corresponde al extraído del mismo.⁴⁰

³⁹ COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Auto 004 de 2009. (26, enero, 2009). M.P Manuel José Cepeda Espinosa [en línea]. En: Corte Corte Constitucional. Santa Fe de Bogotá, D. C.: La Corte. 2009. [Consultado: 17 de agosto de 2022]. Disponible en: <https://www.corte-constitucional.gov.co/relatoria/autos/2009/a004-09.htm>

⁴⁰ OTERO, I., SUÁREZ, F. Minería transnacional en

Los proyectos de minería en la cuenca han transformado el entorno de las comunidades, y de acuerdo con lo comprobado en sede de tutela, las reubicaciones que se han generado con ocasión de la actividad minera han impactado especialmente a las comunidades étnicas.

“La variable que más influye en los wayú es la modificación de su cosmos territorial atado a costumbres, imaginarios y desarrollo espiritual y social. Sin duda alguna su reubicación en espacios confinados con influencias urbanas establecidas terminó siendo un factor negativo de aculturación en detrimento de una etnia ancestral.”⁴¹

La existencia de una relación simbiótica de los pueblos indígenas con el territorio fue reconocida por la Asamblea Nacional Constituyente, estatuida como una titularidad propia del derecho clásico, pero desde una dimensión colectiva del territorio. Es una perspectiva que trasciende fronteras y que ha quedado debidamente documentado en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de comunidades indígenas de otros países (Sentencia SU-123/18).

“Se subrayó el vínculo que tiene la tierra con la cultura, la espiritualidad, la integridad de la colectividad, la supervivencia económica y la preservación de su *ethos* para las generaciones futuras. Así “el territorio tradicional de la [sociedad indígena o tribal abarca] aldeas, zonas de caza, pesca, lugares de entierro, fuentes de plantas medicinales y puntos relevantes en su historia. También se indicó que dentro de los derechos de propiedad se comprende el uso y goce de los recursos naturales en sus territorios”⁴²

La posesión del territorio colectivo no es similar con la titularidad “occidental de corte individual”, pues reviste un significado colectivo cultural en el que la comunidad es con, por y para la tierra. Razón por la cual debe garantizarse que el vínculo con la tierra no se rompa.

Sin embargo, en el caso wayú la relación ancestral con el territorio colectivo quedó dividida en linderos individuales que se transfirieron a terceros a través de contratos de comodato, venta por presión, expropiación, lo que tornó en la imposición de límites o prohibición para el libre tránsito, el desarrollo de actividades agrícolas, pecuarias, cacerías y relacionamiento social.⁴³

Esta conexión también se predica de pueblos tribales. En entrevista realizada por la Corte

Constitucional a un miembro del Consejo Comunitario Afrodescendiente de Chancleta y Patilla, constatada en la Sentencia T-256 de 2015, la Corte encuentra que éste y su familia no aceptaron la reubicación propuesta por Cerrejón. Esta negativa se debe a que se ha dado cuenta que a otros miembros de la comunidad se les prometió territorio para que conservaran su identidad cultural y esto no fue así.⁴⁴

El grupo de familias que interpuso la tutela se negó a ser parte del proyecto, considerando que el proyecto de vivienda atentaba contra su identidad cultural y social como comunidad negra, rural y campesina, considerando debían recibir un tratamiento étnico-diferenciado. Estos procesos de reubicaciones sin la comprensión de la cosmovisión propia de cada comunidad étnica, significa la pérdida de su autonomía.

En los testimonios que se ubican en la citada Sentencia T-256-15, se les pregunta a los miembros de los consejos comunitarios accionantes, “¿cuáles son las condiciones de servicio de agua en cuanto a calidad, disponibilidad, accesibilidad?, W.P.A Bueno, mire eso fue lo primero que contaminó el Cerrejón, ellos fueron creando poco a poco la necesidad. (...) allá hay un bombardeo de contaminación hacen unas taladas que van a descargar al arroyo y ya nosotros no podemos consumir esa agua (...)”.

Pregunta la Corte ¿Qué afectación ha sufrido como consecuencia de la explotación carbonífera la zona de Patilla y Chancleta? “(...) ellos tienen unos socavones donde se crea el carbón y el agua que mana de ese manantial, eso lo utilizan ellos, en tiempos de invierno, paralelo a las aguas lluvia, echan el agua allá en la comunidad de Patilla y se multiplica el zancudo, de toda clase de insectos, como presión para que nos vayamos del territorio (...) Cuando los socavones se llenan, a través de unas turbinas gigantes extraen el agua y nos contaminan el agua muy aleadaña al poblado, donde allí llegan (sic) al pasto son los niños”⁴⁵

Pregunta la Corte, ¿Se encuentra usted satisfecha con las condiciones en que ha sido reubicada en la cabecera municipal de Barranca? Respuesta. No. (...) los proyectos productivos no se están desarrollando, no hay trabajo, no hay ningún tipo de fuente de empleo se han ido agotando o ya en muchas casas se han agotado, eso está generando situaciones bastante difíciles de alimentación, de auto sostenimiento de parte de las familias, por eso veo con ojos de mucha preocupación toda esta situación.

los departamentos de La Guajira y el Cesar: los casos de Cerrejón y Drummond frente a los DESCA. En El Estado Constitucional en la periferia. Tomo II. Universidad Externado de Colombia. 2019. p. 9.

⁴¹ Simancas, D. (2022). *Los daños no reparados al pueblo indígena Wayú a causa de la explotación minera en el departamento de la Guajira*. Universidad Externado de Colombia. 10.57998/bdigital/handle.001.151

⁴² Sentencia de Unificación SU-123 de 2018. Numeral 8.3

⁴³ Simancas, D. (2022).

⁴⁴ COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-256 de 2015. Expediente T-4.587.990. (5, mayo, 2015). M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez [en línea]. En: Corte constitucional. Santa Fe de Bogotá, D. C.: La Corte. 2015. [Consultado: 16 de agosto de 2022]. Disponible en: <https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2015/T-256-15.htm>

⁴⁵ Ibid.

En otras palabras, la reubicación trae consigo la modificación de sus usos y costumbre, especialmente en materia de agricultura, caza y relaciones sociales, prácticas milenarias que con el tiempo se convirtieron en medio de subsistencia y que hoy, ante la falta de acceso a agua potable constituye vulneración a su seguridad alimentaria.

En noticia del periódico El Tiempo⁴⁶, se expone esta grave circunstancia:

*Las mujeres, dueñas de una tradición culinaria excepcional, hoy se lamentan porque sus fogones están apagados. Por generaciones prepararon en ellos yajaushi (mazamorra espesa de maíz, leche y sal), yaja (especie de bollo de maíz acompañado de carne de chivo fresca), las arepas de pulpa del cardón o el yosu, cuya fruta llamada igüaraya tiene gran cantidad de proteínas. Históricamente estos alimentos fueron la base del sustento de la etnia; pero la escasez de agua ha hecho que estas tradiciones se pierdan y con ello lleguen el hambre y la desnutrición.*⁴⁷

Motivados por la supervivencia de su pueblo, esta comunidad ha debido adaptarse a los cambios en el ecosistema, reemplazando su tradición gastronómica y acudiendo al “mercado alijuna (el de la gente blanca). Se dejó de sembrar y procesar la caña de azúcar, el ajonjolí, el maguey. Y es creciente la compra en el mercado de productos como arroz, pastas, manteca de cerdo, gaseosas. Este uno de los mayores problemas de la actual dieta wayú, dados su enorme aporte en carbohidratos y calorías, en detrimento de proteínas, vegetales y vitaminas”.

Los procesos de aculturación devienen principalmente de medidas no concertadas, adoptadas sin la comprensión de la cosmovisión particular de cada comunidad étnica afectada por el proyecto, es por ello que los procesos de reasentamiento proceden de manera excepcional y solo puede adelantarse con el consentimiento previo, libre e informado de la comunidad. Pero además debe garantizarse la reubicación a una tierra de mejor o de igual calidad, con viviendas con acceso a los servicios públicos esenciales. (Sentencia T-256-15).

5.5. De la responsabilidad del Sector Privado en el cuidado del río Ranchería, su cuenca y afluentes

Resulta relevante entender el rol del sector privado en el departamento La Guajira, en lo que corresponde a la gestión del agua. Pues comprender el alcance de los planes y medidas que las empresas deben realizar en torno al consumo y manejo del recurso hídrico permite que la protección del río Ranchería, su cuenca y afluentes, objeto de este proyecto de ley, pueda garantizarse de manera más efectiva a través de dos pilares: i) acceso a información relevante que se produce a través de los

monitoreo del río y sus afluentes y, ii) a través de la armonización de medidas que permitan que todos los actores que confluyen en La Guajira actúen de manera organizada, armónica y coordinada.

En el marco de los permisos ambientales que las empresas gestionan para desarrollar su actividad productiva desarrollan actividades como las siguientes:

- **Un Plan de Uso Eficiente del Agua**, el cual debe establecer acciones y medidas para garantizar que solo se capte y consuma el agua estrictamente necesaria para los usos concesionados, debiendo hacer uso de medidores del flujo del agua, sensores de información en tiempo real, así como de un plan de inspección a la red de captación y abastecimiento.

- **Planes de Manejo Ambiental (PMA)** establecen medidas ambientales y de socialización relevantes para la conservación del medio ambiente, por ejemplo, obligaciones de rehabilitación del territorio de las áreas intervenidas, realizar compensaciones ambientales (reforestación, rehabilitación de suelos).

- Protección de las cuencas altas de las microcuencas que abastecen el río Ranchería.

- Manejo de aguas en los depósitos de roca estéril rehabilitados en lo que las aguas de escorrentía generadas se conducen por canales perimetrales hasta los sistemas de remoción de sólidos que entregan las aguas de nuevo al río Ranchería para aumentar su oferta hídrica en temporadas de lluvias, contribuyen en aumentar la disponibilidad del agua para su uso y abastecimiento de aguas.

- Para la minería, por ejemplo, los pozos de agua para uso doméstico se usan de manera rotativa, y no de manera simultánea, lo cual ayuda a que los niveles de agua siempre estén en recuperación y se mantengan en los valores promedios históricos.

- Construcción de barreras de baja permeabilidad para la protección de acuíferos cuaternarios, las cuales aíslan los acuíferos de los tajos mineros, y por consiguiente impiden que los flujos naturales del agua subterránea migren hacia dichas excavaciones.

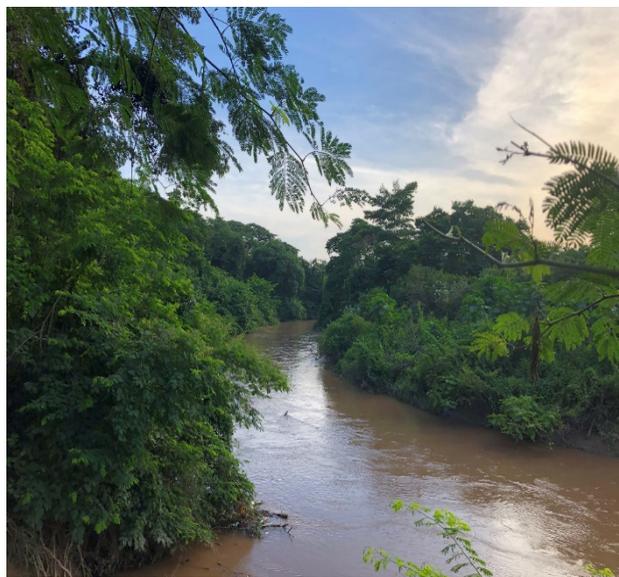
- **Instituto Von Humboldt.** Se cuenta con herramienta de recuperación del territorio a través de una plataforma de monitoreo permanente del bosque seco tropical en una megaparcela de 10 hectáreas el cual se ha convertido en un referente reconocido a nivel mundial.

La empresa Cerrejón reporta que están monitoreando 17.777 individuos de árboles, lianas y cactus (26082) tallos, y a través del programa de conservación de especies en peligro de extinción han advertido la presencia del jaguar panthera onca y el caimán aguja, tortugas hicotea, que brindan información sobre los cambios de hábitat. Más de 60,750 individuos han sido rescatados y reubicados, y 15,485 rehabilitados.

⁴⁶ <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16465245>

⁴⁷ El Tiempo, Hambre en La Guajira, diciembre 15 de 2015.

Estas son algunas fotografías del impacto de estrategias en materia de conservación realizadas por la empresa Cerrejón.



Fotografía. Río Ranchería aguas arriba de la mina



Fotografía. Río Ranchería aguas arriba de la mina



Fotografía. Río Ranchería a su paso por Cerrejón



Fotografía. Río Ranchería a su paso por Cerrejón



6. CONCLUSIÓN

En Colombia ha sido la Rama Judicial la entidad que ha ido reconociendo y protegiendo los derechos de la Naturaleza, al declarar gradualmente desde el año 2016 hasta la actualidad, a los ríos, páramos y ecosistemas como sujetos de derecho de especial protección, conservación, mantenimiento y restauración. Las decisiones se han fundamentado en que, la vida de los seres humanos en sociedad no puede entenderse de forma separada o escindible de la natural, sino que, por el contrario, existe entre ellas una simbiosis o interdependencia como lo señala la doctrina de los Derechos Bioculturales.

Sumando a lo anterior, se observa que hay un déficit de protección jurídica respecto del río Ranchería como fuente hídrica fundamental de nuestra biodiversidad y equilibrio ecológico, de la cual toman el preciado líquido las poblaciones y las comunidades étnicas y campesinas que habitan el área de influencia.

La problemática actual se caracteriza por una serie de desafíos que enfrenta la comunidad wayú, los consejos comunitarios y la región de La Guajira en su conjunto. Estos desafíos incluyen la presencia de grupos armados ilegales, contaminación de fuentes hídricas, deterioro de la calidad aire, riesgo de salud, el desplazamiento forzado, y principalmente la escasez de agua.

Entre estos, la falta de acceso al agua se destaca como una de las situaciones más críticas, ya que la contaminación, las actividades mineras y el cambio climático han ido agotando los recursos hídricos disponibles, su no garantía implica *per se* perpetuar la crisis humanitaria que vive el departamento.

Sin fuentes de agua y garantía de acceso a agua potable en términos de disponibilidad, accesibilidad y calidad, no habrá esfuerzo alguno de alimentación o salud que permita solucionar la situación de desnutrición de los niños y niñas en La Guajira y así prevenir más muertes por esta causa.

En definitiva la falta de acceso al agua potable no solo perpetúa el ciclo de desnutrición y enfermedades, sino que también amenaza la supervivencia misma de las generaciones presentes y futuras en la región.

En este contexto, reconocer al río Ranchería como sujeto de derechos es un acto de justicia ambiental para La Guajira, es el paso para asegurar la vida en condiciones dignas y el medio para asegurar el futuro de las próximas generaciones.

En el marco de los casos judiciales analizados, la declaración como sujetos de derecho a los ríos, páramos y ecosistemas, parte del reconocimiento que las comunidades son los primeros llamados a su conservación, creándose las figuras de comisión de guardianes y representantes legales, para la efectiva salvaguarda de sus derechos y la participación en la creación e implementación de los planes de acción en coordinación con las distintas autoridades del Estado, figuras las cuales se plantean en el presente proyecto.

La iniciativa legislativa, que con esta ponencia se propone convertirla en ley de la República, encuentra soporte jurídico, social y económico en la Constitución Política en los siguientes artículos y en el precedente constitucional citado en acápites anteriores: **Preámbulo** para “asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo”. Artículos **1°** (Estado social de derecho), **2°** (Fines del Estado), **5°** (Supremacía de los derechos de la persona), **7°** (Protección de la diversidad étnica y cultural), **8°** (Protección de la riqueza cultural y natural de la Nación) **11** (Inviolabilidad del derecho a la vida), **12** (Integridad personal), **13** (Derecho a la igualdad), **44** (Derecho de los niños), **48** (Derecho a la seguridad social), **49** (Derecho a la salud y al saneamiento básico), **63** (Protección del patrimonio público), **64** (Garantía de acceso progresivo a la propiedad de la tierra), **65** (Derecho a la seguridad alimentaria), **67** (Derecho a la educación), **70** (Derecho a la cultura), **72** (Protección del patrimonio cultural), **79** (Derecho al medio ambiente sano), **80** (Protección de los recursos naturales), **333** (Libertad económica e iniciativa privada), **356** y **357** (Sistema general de participación), **365** (Servicios públicos eficientes) y **366** (Garantía de bienestar general”).

7. IMPACTO FISCAL

Dando cumplimiento al artículo 7 de la Ley 819 de 2003 “Análisis del impacto fiscal de las normas”. Debemos señalar que, los gastos que se generen de la presente iniciativa legislativa se deben entender como incluidos en los presupuestos y en el Plan Operativo Anual de Inversión al cual haya lugar.

Así las cosas, posterior a la promulgación del presente proyecto de ley, el Gobierno nacional deberá promover y realizar acciones tendientes a su ejercicio y cumplimiento, lo anterior con observancia de la regla y el marco fiscales de mediano plazo.

De conformidad con lo anterior, resulta importante citar un pronunciamiento de la Corte Constitucional acerca del tema, el cual quedó plasmado en la Sentencia C-490 del año 2011, en la cual señala a renglón seguido.

“El mandato de adecuación entre la justificación de los proyectos de ley y la planeación de la política económica, empero, no puede comprenderse como un requisito de trámite para la aprobación de las iniciativas legislativas, cuyo cumplimiento recaiga exclusivamente en el Congreso. Ello en tanto (i) el Congreso carece de las instancias de evaluación técnica para determinar el impacto fiscal de cada proyecto, la determinación de las fuentes adicionales de financiación y la compatibilidad con el marco fiscal de mediano plazo; y (ii) aceptar una interpretación de esta naturaleza constituiría una carga irrazonable para el Legislador y otorgaría un poder correlativo de veto al Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, respecto de la competencia

del Congreso para hacer las leyes. Un poder de este carácter, que involucra una barrera en la función constitucional de producción normativa, se muestra incompatible con el balance entre los poderes públicos y el principio democrático”. (Negrillas fuera de texto).

En el mismo sentido resulta importante citar el pronunciamiento de la Corte Constitucional en la Sentencia C-502/2007, en el cual se puntualizó que el impacto fiscal de las normas no puede convertirse en una barrera, para que las corporaciones públicas (Congreso, asambleas y concejos) ejerzan su función legislativa y normativa:

“En la realidad, aceptar que las condiciones establecidas en el artículo 7° de la Ley 819 de 2003 constituyen un requisito de trámite que le incumbe cumplir única y exclusivamente al Congreso reduce desproporcionadamente la capacidad de iniciativa legislativa que reside en el Congreso de la República, con lo cual se vulnera el principio de separación de las Ramas del Poder Público, en la medida en que se lesiona seriamente la autonomía del Legislativo.

Precisamente, los obstáculos casi insuperables que se generarían para la actividad legislativa del Congreso de la República conducirán a concederle una forma de poder de veto al Ministerio de Hacienda sobre las iniciativas de ley en el Parlamento”.

De conformidad con lo anterior, y como lo ha resaltado la Corte Constitucional, el análisis del impacto fiscal de las iniciativas parlamentarias que se presenten no puede ser una barrera para establecer disposiciones normativas que requieran gastos fiscales. Mencionando además que si bien compete a los congresistas y a ambas cámaras del Congreso de la República la inexorable responsabilidad de estimar y tomar en cuenta el esfuerzo fiscal que el proyecto bajo estudio puede ocasionarle al erario, es claro que es el Gobierno nacional a través del Ministerio de Hacienda, el que dispone de los elementos técnicos necesarios para valorar correctamente ese impacto,

y a partir de ello, llegado el caso, demostrar a los miembros de la Rama Legislativa la inviabilidad financiera del proyecto de ley que en su momento se estudie, en este caso el que nos ocupa.

8. CONFLICTO DE INTERÉS

En virtud de lo establecido en el artículo 286 de la Ley 5ª de 1992, modificado por el artículo 1° de la Ley 2003 de 2019, se considera que, para la discusión y aprobación de la presente iniciativa legislativa no existen circunstancias que pudieran dar lugar a un eventual conflicto de interés por parte de la ponente o de los congresistas a quien se someterá su conocimiento, pues es una iniciativa de carácter general, impersonal y abstracta, con lo cual no se materializa una situación concreta que permita enmarcar un beneficio particular, directo ni actual. En conclusión, este proyecto de ley se enmarca en lo dispuesto en los literales a) y b) del artículo primero de la Ley 2003 de 2019, sobre las hipótesis de cuando se entiende que no hay conflicto de interés. En todo caso, es pertinente aclarar que los conflictos de interés son personales y corresponde a cada Congresista evaluarlos y si es de caso manifestarlos oportunamente.

9. PLIEGO DE MODIFICACIONES

Para segundo debate ante la Honorable Plenaria de la Cámara de Representantes se realizan modificaciones de redacción a los artículos 3° y 4°, así mismo dentro del artículo 2° de los invitados a la Comisión de Guardianes se propone la inclusión de un representante del sector privado delegado por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), ello por cuanto al ser la agremiación que integra empresas pertenecientes al sector industrial, financiero, agroindustrial, de alimentos, comercial, de servicios, entre otros, permitirá garantizar que todos los actores que confluyen en La Guajira actúen de manera organizada, armónica y coordinada para la protección y conservación del río Ranchería, su cuenca y afluentes.

<p>TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE EN SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN QUINTA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES EL DÍA 8 DE MAYO DE 2024.</p>	<p>TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE ANTE PLENARIA DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES</p>
<p>“por medio de la cual se declara al río Ranchería, su cuenca y afluentes como sujeto de derechos y se dictan otras disposiciones”.</p>	<p>Sin modificaciones</p>
<p>Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto declarar al río Ranchería, su cuenca y sus afluentes, como una entidad sujeto de derechos para su conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado.</p> <p>Parágrafo. La presente declaratoria contará con la efectiva participación de las comunidades que habitan en el área de influencia del río Ranchería, del departamento de La Guajira.</p>	<p>Sin modificaciones</p>

<p style="text-align: center;">TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE EN SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN QUINTA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES EL DÍA 8 DE MAYO DE 2024.</p>	<p style="text-align: center;">TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE ANTE PLENARIA DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES</p>
<p>Artículo 2°. Comisión de Guardianes del río Ranchería. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible invitará dentro de los seis meses siguientes a la vigencia de esta ley, a los siguientes actores para que definan la conformación de la Comisión de Guardianes del río Ranchería. Estos tendrán tres meses para manifestar al Ministerio si desean ser parte de la Comisión.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El Ministro(a) de Ambiente y Desarrollo Sostenible o su delegado(a). 2. El Ministro(a) de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado(a) 3. El Ministro(a) de Vivienda, Ciudad y Territorio o su delegado. 4. El Ministro(a) de Minas y Energía o su delegado(a). 5. El Director(a) de las autoridades ambientales competentes de la cuenca del río Ranchería. 6. El Gobernador(a) de La Guajira o su delegado(a). 7. Los alcaldes(as) de los municipios que integren la cuenca del río Ranchería o sus delegados. 8. Un(a) representante por cada municipio de las comunidades indígenas que ejercen derechos territoriales en la cuenca del río Ranchería. 9. Un(a) representante por cada municipio de las comunidades afrodescendientes que ejercen derechos territoriales en la cuenca del río Ranchería. 10. Un(a) representante por cada municipio de las comunidades campesinas que habitan en la cuenca del río Ranchería. 11. Un(a) representante por cada municipio de las juntas de acción comunal con jurisdicción en la cuenca del río Ranchería. 12. Un representante por cada cámara de comercio con jurisdicción en los municipios que integren la cuenca del río Ranchería. 13. Un representante del Consejo de Cuenca del río Ranchería. <p>La Comisión de Guardianes del río Ranchería elegirá un equipo asesor que podrá estar conformado y podrá recibir acompañamiento de todas las entidades públicas y privadas, universidades nacionales y regionales, centros académicos y de investigación en recursos naturales y organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil especialistas en temas ambientales. Será obligatoria en la integración de este equipo asesor, la participación y cooperación del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt (IAVH).</p> <p>Parágrafo. Para la elección de los representantes de las comunidades de los que tratan los numerales 7, 8, 9 y 10 de este artículo, serán elegidos de conformidad con las instancias organizativas que estas tengan. Los representantes podrán participar en la Comisión de Guardianes del río Ranchería hasta por dos (2) años.</p>	<p>Artículo 2°. Comisión de Guardianes del río Ranchería. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible invitará dentro de los seis meses siguientes a la vigencia de esta ley, a los siguientes actores para que definan la conformación de la Comisión de Guardianes del río Ranchería. Estos tendrán tres meses para manifestar al Ministerio si desean ser parte de la Comisión.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El Ministro(a) de Ambiente y Desarrollo Sostenible o su delegado(a). 2. El Ministro(a) de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado(a) 3. El Ministro(a) de Vivienda, Ciudad y Territorio o su delegado. 4. El Ministro(a) de Minas y Energía o su delegado(a). 5. El Director(a) de las autoridades ambientales competentes de la cuenca del río Ranchería. 6. El Gobernador(a) de La Guajira o su delegado(a). 7. Los alcaldes(as) de los municipios que integren la cuenca del río Ranchería o sus delegados. 8. Un(a) representante por cada municipio de las comunidades indígenas que ejercen derechos territoriales en la cuenca del río Ranchería. 9. Un(a) representante por cada municipio de las comunidades afrodescendientes que ejercen derechos territoriales en la cuenca del río Ranchería. 10. Un(a) representante por cada municipio de las comunidades campesinas que habitan en la cuenca del río Ranchería. 11. Un(a) representante por cada municipio de las juntas de acción comunal con jurisdicción en la cuenca del río Ranchería. 12. Un representante por cada cámara de comercio con jurisdicción en los municipios que integren la cuenca del río Ranchería. 13. Un representante del Consejo de Cuenca del río Ranchería. 14. Un representante del sector privado delegado por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI). <p>La Comisión de Guardianes del río Ranchería elegirá un equipo asesor que podrá estar conformado y podrá recibir acompañamiento de todas las entidades públicas y privadas, universidades nacionales y regionales, centros académicos y de investigación en recursos naturales y organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil especialistas en temas ambientales. Será obligatoria en la integración de este equipo asesor, la participación y cooperación del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt (IAVH).</p> <p>Parágrafo. Para la elección de los representantes de las comunidades de los que tratan los numerales 7, 8, 9 y 10 de este artículo, serán elegidos de conformidad con las instancias organizativas que estas tengan. Los representantes podrán participar en la Comisión de Guardianes del río Ranchería hasta por dos (2) años.</p>

<p>TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE EN SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN QUINTA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES EL DÍA 8 DE MAYO DE 2024.</p>	<p>TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE ANTE PLENARIA DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES</p>
<p>Artículo 3°. <i>Plan de Acción.</i> La Comisión de Guardianes del río Ranchería y el equipo asesor designado elaborarán un Plan de Acción del río Ranchería, su cuenca y afluentes, que permita, entre otras cosas, su descontaminación, así como la de los territorios ribereños; recuperar, rehabilitar y restaurar sus ecosistemas y evitar daños adicionales al ambiente en la región, garantizando su goce pacífico y equilibrado con el medio ambiente.</p> <p>El Plan de Acción se elaborará en un término máximo de veinticuatro (24) meses siguientes, a la conformación de la Comisión de Guardianes del río Ranchería. El Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca (POMCA) del río Ranchería, deberá ser incluido en el Plan de Acción que elabora la Comisión.</p> <p>El Plan de Acción incluirá indicadores que permitan medir su eficacia y determinará las entidades responsables de cada acción establecida, de acuerdo con las funciones legales de cada institución.</p> <p>La elaboración y ejecución del Plan de Acción será financiado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el departamento de La Guajira y la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira).</p> <p>Parágrafo 1°. El Plan de Acción tendrá una vigencia de 10 años y será actualizado acorde a las disposiciones de renovación del POMCA del río Ranchería.</p> <p>Parágrafo 2°. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, La Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira) y el departamento de La Guajira presentarán un informe anual de la ejecución del Plan de Acción al Consejo Directivo y Asamblea Departamental de La Guajira.</p> <p>Parágrafo 3°. El Plan de Acción y sus reformas deberán ser remitidos a la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior para que esta determine si debe realizar la consulta previa, libre e informada con las comunidades étnicas que ejerzan derechos territoriales en la cuenca del río Ranchería, de conformidad con lo establecido en el Convenio 169 de 1989 de la OIT y la jurisprudencia constitucional.</p> <p>Parágrafo 4°. El plan de acción deberá respetar los derechos adquiridos de las actividades y proyectos que se desarrollan en la zona de influencia del río Ranchería, su cuenca y afluentes.</p>	<p>Artículo 3°. <i>Plan de Acción.</i> La Comisión de Guardianes del río Ranchería y el equipo asesor designado elaborarán un Plan de Acción del río Ranchería, su cuenca y afluentes, que permita, entre otras cosas, su descontaminación, así como la de los territorios ribereños; recuperar, rehabilitar y restaurar sus ecosistemas y evitar daños adicionales al ambiente en la región, garantizando su goce pacífico y equilibrado con el medio ambiente.</p> <p>El Plan de Acción se elaborará en un término máximo de veinticuatro (24) meses siguientes, a la conformación de la Comisión de Guardianes del río Ranchería. El Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca (POMCA) del río Ranchería, deberá ser incluido en el Plan de Acción que elabora la Comisión.</p> <p>El Plan de Acción incluirá indicadores que permitan medir su eficacia y determinará las entidades responsables de cada acción establecida, de acuerdo con las funciones legales de cada institución.</p> <p>La elaboración y ejecución del Plan de Acción será financiado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el departamento de La Guajira y la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira).</p> <p>Parágrafo 1°. El Plan de Acción tendrá una vigencia de 10 años y será actualizado acorde a las disposiciones de renovación del POMCA del río Ranchería.</p> <p>Parágrafo 2°. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, La Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira) y el departamento de La Guajira presentarán un informe anual de la ejecución del Plan de Acción al Consejo Directivo y Asamblea Departamental de La Guajira.</p> <p>Parágrafo 3°. El Plan de Acción y sus reformas deberán ser remitidos a la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior para que esta determine si debe realizar la consulta previa, libre e informada con las comunidades étnicas que ejerzan derechos territoriales en la cuenca del río Ranchería, de conformidad con lo establecido en el Convenio 169 de 1989 de la OIT y la jurisprudencia constitucional.</p> <p>Parágrafo 4°. El Plan de Acción deberá respetar los derechos adquiridos de las actividades y proyectos que se desarrollan en la zona de influencia del río Ranchería, su cuenca y afluentes.</p>

<p>TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE EN SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN QUINTA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES EL DÍA 8 DE MAYO DE 2024.</p>	<p>TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE ANTE PLENARIA DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES</p>
<p>Artículo 4°. Mecanismos de funcionamiento y toma de decisiones. La Comisión de los Guardianes del río Ranchería establecerá su propio reglamento regulando su funcionamiento, la toma de decisiones a través de mecanismos democráticos y rendirán un informe semestral a la comunidad sobre las actividades realizadas, para la implementación del Plan de Acción.</p> <p>La Procuraduría General de la Nación Regional Guajira, la Contraloría General de la República Regional Guajira y la Defensoría del Pueblo Regional Guajira, conforme a sus competencias constitucionales y legales, realizarán un proceso de acompañamiento y seguimiento al cumplimiento y ejecución de la presente ley, en concordancia con lo establecido en el plan de acción en el corto, mediano y largo plazo.</p> <p>Estas entidades rendirán un informe conjunto semestral a la comunidad donde detallarán las actividades de seguimiento y control realizadas.</p>	<p>Artículo 4°. Mecanismos de funcionamiento y toma de decisiones. La Comisión de los Guardianes del río Ranchería establecerá su propio reglamento regulando su funcionamiento, la toma de decisiones a través de mecanismos democráticos y rendirán un informe semestral a la comunidad sobre las actividades realizadas, para la implementación del Plan de Acción.</p> <p>La Procuraduría General de la Nación Regional Guajira, la Contraloría General de la República Regional del Departamento de La Guajira y la Defensoría del Pueblo Regional Guajira, conforme a sus competencias constitucionales y legales, realizarán un proceso de acompañamiento y seguimiento al cumplimiento y ejecución de la presente ley, en concordancia con lo establecido en el plan de acción en el corto, mediano y largo plazo.</p> <p>Estas entidades rendirán un informe conjunto semestral a la comunidad donde detallarán las actividades de seguimiento y control realizadas.</p>
<p>Artículo 5°. Asignaciones presupuestales. Autorícese al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o quien haga sus veces, al departamento de La Guajira y a la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira) para que en sus presupuestos incluyan las apropiaciones correspondientes para cumplir cabalmente con el objeto de la presente ley.</p> <p>Autorícese al Departamento Nacional de Planeación para que, de acuerdo con los principios y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, incorpore los planes de inversión de mediano y corto plazo para las políticas públicas establecidas en el Documento Conpes 3944 de 2018 por medio del cual se establece una “Estrategia para el desarrollo integral del departamento de La Guajira y sus pueblos indígenas”, o el Documento Conpes que lo sustituya o modifique. Lo anterior, se hará respetando el Principio de Sostenibilidad Fiscal.</p>	<p>Artículo 5°. Asignaciones presupuestales. Autorícese al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o quien haga sus veces, al departamento de La Guajira y a la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira) para que en sus presupuestos incluyan las apropiaciones correspondientes para cumplir cabalmente con el objeto de la presente ley.</p> <p>Autorícese al Departamento Nacional de Planeación para que, de acuerdo con los principios y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, incorpore los planes de inversión de mediano y corto plazo para las políticas públicas establecidas en el Documento Conpes 3944 de 2018 por medio del cual se establece una “Estrategia para el desarrollo integral del departamento de La Guajira y sus pueblos indígenas”, o el Documento Conpes que lo sustituya o modifique. Lo anterior, se hará respetando el Principio de Sostenibilidad Fiscal.</p>
<p>Artículo 6°. Implementación de acciones. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en asocio con la Corporación Autónoma de La Guajira (Corpoguajira) deberán implementar las acciones necesarias para restablecer las condiciones ambientales del río Ranchería en todos sus aspectos e informar a las plenarias de las Comisiones Quintas del Congreso de la República, dentro de los seis meses siguientes a la vigencia de esta ley, el estado actual del río Ranchería, detallando las condiciones actuales, las afectaciones causadas, los actores causantes de la afectación y el estado de cumplimiento de las órdenes judiciales a su cargo.</p> <p>Cada seis meses, enviarán un informe sobre el avance de las acciones en busca del restablecimiento del río Ranchería.</p> <p>Entre las acciones de restablecimiento, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, deberá garantizar que se eliminen todos los bloqueos que impiden el caudal natural del río Ranchería en todo su trayecto, con el fin de que se cumplan las condiciones ambientales propias y se permita el acceso del agua a todas las comunidades que históricamente se han beneficiado.</p>	<p>Sin modificaciones</p>
<p>Artículo 7°. Vigencia y derogaciones. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.</p>	<p>Sin modificaciones</p>

10. PROPOSICIÓN

Con fundamento en las razones expuestas, me permito rendir PONENCIA DE SEGUNDO DEBATE EN CÁMARA DE REPRESENTANTES y en consecuencia solicitarles a los honorables miembros del Pleno de la Cámara de Representantes dar Segundo Debate y aprobar el texto propuesto al Proyecto de Ley número 323 de 2023 Cámara, 171 de 2022 Senado, *por medio del cual se declara al río Ranchería, su cuenca y afluentes como sujeto de derechos y se dictan otras disposiciones.*

De los honorables Representantes,


ANA ROGELIA MONSALVE ÁLVAREZ
 Representante a la Cámara por la Circunscripción Especial Afrodescendientes
 Partido Demócrata Colombiano

11. TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE LEY 323 DE 2023 CÁMARA, 171 DE 2022 SENADO

por medio de la cual se declara al río Ranchería, su cuenca y afluentes como sujeto de derechos y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. *Objeto.* La presente ley tiene por objeto declarar al río Ranchería, su cuenca y sus afluentes, como una entidad sujeto de derechos para su conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado.

Parágrafo. La presente declaratoria contará con la efectiva participación de las comunidades que habitan en el área de influencia del río Ranchería, del departamento de La Guajira.

Artículo 2°. *Comisión de Guardianes del río Ranchería.* El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible invitará dentro de los seis meses siguientes a la vigencia de esta ley, a los siguientes actores para que definan la conformación de la Comisión de Guardianes del río Ranchería. Estos tendrán tres meses para manifestar al Ministerio si desean ser parte de la Comisión.

1. El Ministro(a) de Ambiente y Desarrollo Sostenible o su delegado(a).
2. El Ministro(a) de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado(a).
3. El Ministro(a) de Vivienda, Ciudad y Territorio o su delegado.
4. El Ministro(a) de Minas y Energía o su delegado(a).
5. El Director(a) de las autoridades ambientales competentes de la cuenca del río Ranchería.
6. El Gobernador(a) de La Guajira o su delegado(a).
7. Los alcaldes(as) de los municipios que integren la cuenca del río Ranchería o sus delegados.

8. Un(a) representante por cada municipio de las comunidades indígenas que ejercen derechos territoriales en la cuenca del río Ranchería.

9. Un(a) representante por cada municipio de las comunidades afrodescendientes que ejercen derechos territoriales en la cuenca del río Ranchería.

10. Un(a) representante por cada municipio de las comunidades campesinas que habitan en la cuenca del río Ranchería.

11. Un(a) representante por cada municipio de las juntas de acción comunal con jurisdicción en la cuenca del río Ranchería.

12. Un representante por cada cámara de comercio con jurisdicción en los municipios que integren la cuenca del río Ranchería.

13. Un representante del Consejo de Cuenca del río Ranchería.

14. Un representante del sector privado delegado por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI).

La Comisión de Guardianes del río Ranchería elegirá un equipo asesor que podrá estar conformado y podrá recibir acompañamiento de todas las entidades públicas y privadas, universidades nacionales y regionales, centros académicos y de investigación en recursos naturales y organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil especialistas en temas ambientales. Será obligatoria en la integración de este equipo asesor, la participación y cooperación del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt (IAVH).

Parágrafo. Para la elección de los representantes de las comunidades de los que tratan los numerales 7, 8, 9 y 10 de este artículo, serán elegidos de conformidad con las instancias organizativas que estas tengan. Los representantes podrán participar en la Comisión de Guardianes del río Ranchería hasta por dos (2) años.

Artículo 3°. *Plan de Acción.* La Comisión de Guardianes del río Ranchería y el equipo asesor designado elaborarán un Plan de Acción del río Ranchería, su cuenca y afluentes, que permita, entre otras cosas, su descontaminación, así como la de los territorios ribereños; recuperar, rehabilitar y restaurar sus ecosistemas y evitar daños adicionales al ambiente en la región, garantizando su goce pacífico y equilibrado con el medio ambiente.

El Plan de Acción se elaborará en un término máximo de veinticuatro (24) meses siguientes, a la conformación de la Comisión de Guardianes del río Ranchería. El Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca (POMCA) del río Ranchería, deberá ser incluido en el Plan de Acción que elabore la Comisión.

El Plan de Acción incluirá indicadores que permitan medir su eficacia y determinará las entidades responsables de cada acción establecida, de acuerdo con las funciones legales de cada institución.

La elaboración y ejecución del Plan de Acción será financiado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el departamento de La Guajira y la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira).

Parágrafo 1°. El Plan de Acción tendrá una vigencia de 10 años y será actualizado acorde a las disposiciones de renovación del POMCA del río Ranchería.

Parágrafo 2°. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, La Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira) y el departamento de La Guajira presentarán un informe anual de la ejecución del Plan de Acción al Consejo Directivo y Asamblea Departamental de La Guajira.

Parágrafo 3°. El Plan de Acción y sus reformas deberán ser remitidos a la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior para que esta determine si debe realizar la consulta previa, libre e informada con las comunidades étnicas que ejerzan derechos territoriales en la cuenca del río Ranchería, de conformidad con lo establecido en el Convenio 169 de 1989 de la OIT y la jurisprudencia constitucional.

Parágrafo 4°. El Plan de Acción deberá respetar los derechos adquiridos de las actividades y proyectos que se desarrollan en la zona de influencia del río Ranchería, su cuenca y afluentes.

Artículo 4°. *Mecanismos de funcionamiento y toma de decisiones.* La Comisión de los Guardianes del río Ranchería establecerá su propio reglamento regulando su funcionamiento, la toma de decisiones a través de mecanismos democráticos y rendirán un informe semestral a la comunidad sobre las actividades realizadas, para la implementación del Plan de Acción.

La Procuraduría General de la Nación Regional Guajira, la Contraloría General del Departamento de La Guajira y la Defensoría del Pueblo Regional Guajira, conforme a sus competencias constitucionales y legales, realizarán un proceso de acompañamiento y seguimiento al cumplimiento y ejecución de la presente ley, en concordancia con lo establecido en el plan de acción en el corto, mediano y largo plazo.

Estas entidades rendirán un informe conjunto semestral a la comunidad donde detallarán las actividades de seguimiento y control realizadas.

Artículo 5°. *Asignaciones presupuestales.* Autorícese al Gobierno nacional, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o quien haga sus veces, al departamento de La Guajira y a la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira) para que en sus presupuestos

incluyan las apropiaciones correspondientes para cumplir cabalmente con el objeto de la presente ley.

Autorícese al Departamento Nacional de Planeación para que, de acuerdo con los principios y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, incorpore los planes de inversión de mediano y corto plazo para las políticas públicas establecidas en el Documento Conpes 3944 de 2018 por medio del cual se establece una “Estrategia para el desarrollo integral del departamento de La Guajira y sus pueblos indígenas”, o el Documento Conpes que lo sustituya o modifique. Lo anterior, se hará respetando el Principio de Sostenibilidad Fiscal.

Artículo 6°. *Implementación de acciones.* El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en asocio con la Corporación Autónoma de La Guajira (Corpoguajira) deberán implementar las acciones necesarias para restablecer las condiciones ambientales del río Ranchería en todos sus aspectos e informar a las plenarias de las Comisiones Quintas del Congreso de la República, dentro de los seis meses siguientes a la vigencia de esta ley, el estado actual del río Ranchería, detallando las condiciones actuales, las afectaciones causadas, los actores causantes de la afectación y el estado de cumplimiento de las órdenes judiciales a su cargo.

Cada seis meses, enviarán un informe sobre el avance de las acciones en busca del restablecimiento del río Ranchería.

Entre las acciones de restablecimiento, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, deberá garantizar que se eliminen todos los bloqueos que impiden el caudal natural del río Ranchería en todo su trayecto, con el fin de que se cumplan las condiciones ambientales propias y se permita el acceso del agua a todas las comunidades que históricamente se han beneficiado.

Artículo 7°. *Vigencia y derogaciones.* La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

De los honorables Representantes,

ANA ROGELIA MONSALVE ÁLVAREZ

Representante a la Cámara por la Circunscripción Especial Afrodescendientes
Partido Demócrata Colombiano

**TEXTO APROBADO EN PRIMER
DEBATE EN SESIÓN ORDINARIA DE LA
COMISIÓN QUINTA CONSTITUCIONAL
PERMANENTE DE LA CÁMARA DE
REPRESENTANTES EL DÍA 8 DE MAYO
DE 2024.**

**PROYECTO DE LEY 323 DE 2023
CÁMARA, 171 DE 2022 SENADO**

*por medio de la cual se declara al río ranchería,
su cuenca y afluentes como sujeto de derechos y se
dictan otras disposiciones.*

El Congreso de Colombia**DECRETA:**

Artículo 1°. *Objeto.* La presente ley tiene por objeto declarar al río Ranchería, su cuenca y sus afluentes, como una entidad sujeto de derechos para su conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado.

Parágrafo. La presente declaratoria contará con la efectiva participación de las comunidades que habitan en el área de influencia del río Ranchería, del departamento de La Guajira.

Artículo 2°. *Comisión de Guardianes del río Ranchería.* El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible invitará dentro de los seis meses siguientes a la vigencia de esta ley, a los siguientes actores para que definan la conformación de la Comisión de Guardianes del río Ranchería. Estos tendrán tres meses para manifestar al Ministerio si desean ser parte de la Comisión.

1. El Ministro(a) de Ambiente y Desarrollo Sostenible o su delegado(a).
2. El Ministro(a) de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado(a)
3. El Ministro(a) de Vivienda, Ciudad y Territorio o su delegado.
4. El Ministro(a) de Minas y Energía o su delegado(a).
5. El Director(a) de las autoridades ambientales competentes de la cuenca del río Ranchería.
6. El Gobernador(a) de La Guajira o su delegado(a).
7. Los alcaldes(as) de los municipios que integren la cuenca del río Ranchería o sus delegados.
8. Un(a) Representante por cada municipio de las comunidades indígenas que ejercen derechos territoriales en la cuenca del río Ranchería.
9. Un(a) Representante por cada municipio de las comunidades afrodescendientes que ejercen derechos territoriales en la cuenca del río Ranchería.
10. Un(a) Representante por cada municipio de las comunidades campesinas que habitan en la cuenca del río Ranchería.
11. Un(a) Representante por cada municipio de las juntas de acción comunal con jurisdicción en la cuenca del río Ranchería.
12. Un Representante por cada cámara de comercio con jurisdicción en los municipios que integren la cuenca del río Ranchería.
13. Un Representante del Consejo de Cuenca del río Ranchería.

La Comisión de Guardianes del río Ranchería elegirá un equipo asesor que podrá estar conformado y podrá recibir acompañamiento de todas las entidades públicas y privadas, universidades nacionales y regionales, centros académicos y de investigación en recursos naturales y organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil especialistas en

temas ambientales. Será obligatoria en la integración de este equipo asesor, la participación y cooperación del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt (IAVH).

Parágrafo. Para la elección de los representantes de las comunidades de los que tratan los numerales 7, 8, 9 y 10 de este artículo, serán elegidos de conformidad con las instancias organizativas que estas tengan. Los representantes podrán participar en la Comisión de Guardianes del río Ranchería hasta por dos (2) años.

Artículo 3°. *Plan de Acción.* La Comisión de Guardianes del río Ranchería y el equipo asesor designado elaborarán un Plan de Acción del río Ranchería, su cuenca y afluentes, que permita, entre otras cosas, su descontaminación, así como la de los territorios ribereños; recuperar, rehabilitar y restaurar sus ecosistemas y evitar daños adicionales al ambiente en la región, garantizando su goce pacífico y equilibrado con el medio ambiente.

El Plan de Acción se elaborará en un término máximo de veinticuatro (24) meses siguientes, a la conformación de la Comisión de Guardianes del río Ranchería. El Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca (POMCA) del río Ranchería, deberá ser incluido en el Plan de Acción que elabore la Comisión.

El Plan de Acción incluirá indicadores que permitan medir su eficacia y determinará las entidades responsables de cada acción establecida, de acuerdo con las funciones legales de cada institución.

La elaboración y ejecución del Plan de Acción será financiado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el departamento de La Guajira y la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira).

Parágrafo 1°. El Plan de Acción tendrá una vigencia de 10 años y será actualizado acorde a las disposiciones de renovación del POMCA del río Ranchería.

Parágrafo 2°. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, La Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira) y el departamento de La Guajira presentarán un informe anual de la ejecución del Plan de Acción al Consejo Directivo y Asamblea Departamental de La Guajira.

Parágrafo 3°. El Plan de Acción y sus reformas deberán ser remitidos a la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior para que esta determine si debe realizar la consulta previa, libre e informada con las comunidades étnicas que ejerzan derechos territoriales en la cuenca del río Ranchería, de conformidad con lo establecido en el Convenio 169 de 1989 de la OIT y la jurisprudencia constitucional.

Parágrafo 4°. El plan de acción deberá respetar los derechos adquiridos de las actividades y proyectos

que se desarrollan en la zona de influencia del río Ranchería, su cuenca y afluentes.

Artículo 4°. *Mecanismos de funcionamiento y toma de decisiones.* La Comisión de los Guardianes del río Ranchería establecerá su propio reglamento regulando su funcionamiento, la toma de decisiones a través de mecanismos democráticos y rendirán un informe semestral a la comunidad sobre las actividades realizadas, para la implementación del Plan de Acción.

La Procuraduría General de la Nación Regional Guajira, la Contraloría General de la República Regional Guajira y la Defensoría del Pueblo Regional Guajira, conforme a sus competencias constitucionales y legales, realizarán un proceso de acompañamiento y seguimiento al cumplimiento y ejecución de la presente ley, en concordancia con lo establecido en el plan de acción en el corto, mediano y largo plazo.

Estas entidades rendirán un informe conjunto semestral a la comunidad donde detallarán las actividades de seguimiento y control realizadas.

Artículo 5°. *Asignaciones presupuestales.* Autorícese al Gobierno nacional, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o quien haga sus veces, al departamento de La Guajira y a la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira) para que en sus presupuestos incluyan las apropiaciones correspondientes para cumplir cabalmente con el objeto de la presente ley.

Autorícese al Departamento Nacional de Planeación para que, de acuerdo con los principios y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, incorpore los planes de inversión de mediano y corto plazo para las políticas públicas establecidas en el Documento Conpes 3944 de 2018 por medio del cual se establece una “Estrategia para el desarrollo integral del departamento de La Guajira y sus pueblos indígenas”, o el Documento Conpes que lo sustituya o modifique. Lo anterior, se hará respetando el Principio de Sostenibilidad Fiscal.

Artículo 6°. *Implementación de acciones.* El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,

en asocio con la Corporación Autónoma de La Guajira (Corpoguajira) deberán implementar las acciones necesarias para restablecer las condiciones ambientales del río Ranchería en todos sus aspectos e informar a las plenarias de las Comisiones Quintas del Congreso de la República, dentro de los seis meses siguientes a la vigencia de esta ley, el estado actual del río Ranchería, detallando las condiciones actuales, las afectaciones causadas, los actores causantes de la afectación y el estado de cumplimiento de las órdenes judiciales a su cargo.

Cada seis meses, enviarán un informe sobre el avance de las acciones en busca del restablecimiento del río Ranchería.

Entre las acciones de restablecimiento, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, deberá garantizar que se eliminen todos los bloqueos que impiden el caudal natural del río Ranchería en todo su trayecto, con el fin de que se cumplan las condiciones ambientales propias y se permita el acceso del agua a todas las comunidades que históricamente se han beneficiado.

Artículo 7°. *Vigencia y derogaciones.* La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

ANA ROGELIA MONSALVE ÁLVAREZ
Representante a la Cámara por la Circunscripción Especial
Afrodescendientes
Partido Demócrata Colombiano

La relación completa de la aprobación en primer debate del proyecto de ley consta en el Acta número 037, correspondiente a la sesión realizada el día 8 de mayo de 2024; el anuncio de la votación del proyecto de ley se hizo el día 7 de mayo de 2024, Acta número 036, de acuerdo con el artículo 8 del Acto Legislativo 1 de 2003.

CAMILO ERNESTO ROMERO GALVÁN
Secretario
Comisión Quinta Constitucional Permanente